



Fecha **18 JUL. 2013**

SALIDA **12774**



AYUNTAMIENTO de RIBARROJA DEL TURIA

N. Registro: 2013011909
Fecha y hora: 28/07/2013 12:30:47
Título: Instancia



CC- 26 JUL. 2013

set-

ALCALDIA PRESIDENCIA DE L'AJUNTAMENT
Pl Ayuntamiento, 9
46190 RIBARROJA DEL TURIA (VALÈNCIA)

N/EXPTE. D-1249/05

N/REF. AR/gm

ASUNTO: REMISION DOCUMENTACION

En fecha 2 de julio de 2013 ha tenido entrada en este Centro Directivo su oficio relativo al vertedero de Basseta Blanca ubicado en ese término municipal, en el que, entre otros extremos, solicita la remisión a ese Ayuntamiento de las alegaciones completas que el EMTRE ha remitido a la Conselleria, así como se facilite copia del informe jurídico emitido.

A la vista de la citada solicitud se adjunta:

- Requerimiento de fecha de Registro de Salida 11 de julio de 2012 a la EMTRE (ANEXO I)
- Alegaciones formuladas por EMTRE ante el Requerimiento (ANEXO II)
- Informe jurídico sobre si la EMTRE ostenta la condición de operador responsable” de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Medioambiental (ANEXO III)

En otro orden y dentro de las actuaciones seguidas por esta Dirección General, se pone en su conocimiento que, dado que tras la investigación efectuada por la Confederación Hidrográfica del Júcar se informó que había sido dictada Resolución por la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto por la EMTRE contra la Resolución del expediente sancionador 2008 DU0276 por efectuar vertidos de lixiviados al terreno procedentes del vertedero clausurado de Basseta Blanca sin autorización administrativa, interponiéndose recurso contencioso-administrativo que dio lugar al Procedimiento Ordinario 5/001079/2011-RU, se ha solicitado en fecha 7 de junio de 2013 información acerca de si ha sido dictada Sentencia en el expresado procedimiento judicial.

Asimismo, se ha oficiado al Registro de la Propiedad de Benaguacil al objeto de tener constancia fehaciente de la titularidad de la parcela 15 del polígono 58 de ese término municipal, donde se ubicó el vertedero, con la finalidad de iniciar actuaciones con el actual propietario de la misma.

18 JUL. 2013

València,

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL


Vicente Tejedo Tormo





FECHA: 11 JUL 2012

SALIDA 15657

AR/SA

Expte: D-1249/05

COPIA

ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Plaza del Ayuntamiento, 9-2º

46002 VALENCIA

Valencia, 5 de julio de 2012

Examinada la documentación obrante en el Servicio de Inspección Medioambiental adscrito a esta Dirección General, relativa al antiguo vertedero de Basseta Blanca, sito en el término municipal de Riba-roja de Túria, resulta que:

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, mediante Resolución de Alcaldía de fecha 15 de noviembre de 1984, concedió licencia al Ayuntamiento de Valencia y a Compañía Valenciana de Fertilizantes, S.A. (FERVASA) para la actividad de vertedero con emplazamiento en Basseta Blanca.

El 18 de abril de 1986 se firmó Convenio sobre residuos sólidos entre el Ayuntamiento de Valencia y el de Riba-roja de Túria para garantizar durante su período de vigencia (diez años, contados a partir del 1 de julio de 1986) el vertido de residuos sólidos en el vertedero controlado de Basseta Blanca.

En 1986, FERVASA firmó contrato con el Ayuntamiento de Valencia para la gestión del servicio de acondicionamiento y explotación del vertedero, sujeto al pliego de condiciones técnicas aprobadas por la citada Corporación (cuyos artículos 12.7 y 31 se refieren, respectivamente, a la obligación periódica de evacuación de lixiviados y a las actuaciones a realizar conforme se produzca el agotamiento gradual del vertedero).

El 28 de julio de 1989 se suscribió Convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y el Consell Metropolità de l'Horta con el fin de establecer la organización metropolitana de determinados servicios, entre ellos el de eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (cláusula segunda).

En fecha 30 de abril de 1990, en desarrollo del antes citado convenio, se firmó el Convenio específico entre el Ayuntamiento de Valencia y el Consell Metropolità de l'Horta para la transferencia a este último organismo de los activos afectos al servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos, en cuya cláusula cuarta se establece la subrogación del Consell Metropolità de l'Horta en todos los derechos y obligaciones

derivados del Convenio de 18 de abril de 1986. Por tanto, a partir de dicha fecha el Consell Metropolità de l'Horta se convirtió en organismo rector del vertedero.

En el Servicio de Inspección Medioambiental se han recibido diversas denuncias, formuladas por el SEPRONA de la Guardia Civil de Benaguasil (debido a la constatación de la existencia de residuos al descubierto, fuertes olores, mal estado de la valla perimetral y numerosos puntos de vertidos de lixiviados), por Agentes Medioambientales (como consecuencia de vertidos de aguas sucias y depósitos de acumulación de lixiviados procedentes del vertedero en cuestión, que se desbordan discurriendo hasta el barranco de La Pedrera debido al incorrecto sellado del mismo, generando malos olores para las viviendas), así como por asociaciones (que ponen de relieve el impacto ambiental producido por el vertedero de Basseta Blanca, a saber: contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas, daños a la vegetación e impactos paisajísticos, entre otros).

Por tal motivo, se solicitó Informe al Servicio de Gestión de Residuos de esta Dirección General, que fue emitido en fecha 13 de abril de 2012. En tal Informe se describe, como consecuencia de la **inspección visual** realizada el día **29 de marzo de 2012**, la situación existente en los sectores norte y este del perímetro del vertedero (al no poder accederse al interior del mismo). De la situación constatada **se concluye** lo siguiente:

1º) Deben iniciarse las actuaciones correspondientes que analicen el estado actual del vertedero y determinen de forma precisa, cuantificada y presupuestada las actuaciones necesarias para su corrección, estabilización, mantenimiento, control y vigilancia.

2º) Para verificar, evaluar y cuantificar la posible afección al subsuelo producida por el vertido y adoptar las medidas correctoras adecuadas **deberá realizarse una caracterización ambiental (por empresa con acreditada experiencia en suelos contaminados que, previamente, deberá presentar un Plan de trabajo al Servicio de Gestión de Residuos para su valoración y aprobación) **de los terrenos que hubieran podido verse afectados y, en su caso, de las aguas subterráneas.****

Además, en el citado Informe se aclara que aunque el vertedero finalizó su actividad en junio de 1996 (antes de la entrada en vigor de la *Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos*, de la *Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana* y del *Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero*) y, por tanto, estaba sometido a la normativa vigente en aquel momento (esto es, a la *Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos*), ello no exime de responsabilidad por el estado actual del vertedero a quien corresponda, titular y/o explotador, para que

establezca las medidas correctoras oportunas y se haga cargo posteriormente del mantenimiento, control y vigilancia de las mismas y del vertedero en su conjunto.

Como consecuencia de todo lo anterior, y a pesar de que consta como antecedente en el expediente arriba referenciado las manifestaciones que esa entidad efectuó en su escrito de fecha 24 de enero de 2006 (en el que afirma que "el hecho de que la ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS haya sucedido en la titularidad de las competencias al extinto Consell Metropolità de l'Horta no supone, en el presente caso, que también sea responsable del control y gestión de los lixiviados producidos en la fase posterior a la clausura"), se les requiere para que, en plazo de **UN MES** acrediten ante esta Dirección General lo siguiente:

1º) El inicio de las actuaciones correspondientes que analicen el estado actual del vertedero y determinen de forma precisa, cuantificada y presupuestada las actuaciones necesarias para su corrección, estabilización, mantenimiento, control y vigilancia.

2º) La caracterización ambiental (por empresa con acreditada experiencia en suelos contaminados que, previamente, deberá presentar un Plan de trabajo al Servicio de Gestión de Residuos para su valoración y aprobación) **de los terrenos que hubieran podido verse afectados y, en su caso, de las aguas subterráneas**, a fin de verificar, evaluar y cuantificar la posible afección al subsuelo producida por el vertido y adoptar las medidas correctoras adecuadas.

Si transcurrido el citado plazo no hubiere sido presentada la documentación requerida o formulada alegación contraria a este requerimiento, podría constituir infracción administrativa a lo previsto en la *Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana* y en la *Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental*.

EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL


Vicente Tejedo Tormo



Fecha - 7 AGO. 2012

ENTRADA 118924/230

s/Rfª.: Expte: D-1249/05

ASUNTO: ALEGACIONES CONTRA EL REQUERIMIENTO DE FECHA 5 DE JULIO DE 2012 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT, SOBRE ACTUACIONES DE LA EMTRE EN EL ANTIGUO VERTEDERO DE BASSETA BLANCA, MUNICIPIO DE RIBA-ROJA DEL TURIA (VALENCIA).

M^a ÀNGELS RAMÓN-LLIN MARTÍNEZ, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza del Ayuntamiento nº 9 - 2^a, de Valencia (46002), en calidad de Presidenta de la ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, actuando en nombre y representación de la misma, de conformidad con lo estipulado por el apartado a) del artículo 80 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, ante esa Dirección General comparece y Dice:

Que mediante el presente escrito formula oposición contra el requerimiento de fecha 05/07/2012, notificado el día 20 del mismo mes, del Director General de Calidad Ambiental por el que se emplaza a esta Entidad para que en plazo de un mes se acrediten las actuaciones relativas al estado actual del vertedero sito en la partida de Basseta Blanca, en el término municipal de Riba-roja del Turia (Valencia), así como las medidas correctoras que proceda adoptar, con fundamento en las siguientes

ALEGACIONES :

PRIMERA. El escrito trasladado en relación al expediente D-1249/05 relativo a las irregularidades existentes en el antiguo vertedero de Basseta Blanca, sito en el término municipal de Riba-roja del Turia, incurre en error de hecho, al estar erróneamente determinado el presunto responsable de los hechos denunciados.

En dicho escrito literalmente se afirma que, según el Informe emitido por el Servicio de Gestión de Residuos de esa Dirección General, *"aunque el vertedero finalizó su actividad en junio de 1996 (antes de la entrada en vigor de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana; y del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero) y, por tanto, estaba sometido a la normativa vigente en aquel momento (esto es, a la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos), ello no exime de responsabilidad por el estado actual del vertedero a quien corresponda, titular y o explotador, para que establezca la medidas correctoras oportunas y se haga cargo posteriormente del mantenimiento, control y vigilancia de las mismas y del vertedero*

en su conjunto". Al respecto, esa Dirección General considera erróneamente que el titular y/o explotador del vertedero es la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, sucesora en esta materia, en su opinión, del extinto Consell Metropolità de l'Horta.

Pues bien, hay que manifestar categóricamente y con rotundidad, que esta Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) no es, ni fue nunca, la titular y/o explotadora del Vertedero al que se refiere el referido escrito de la Dirección General de Calidad Ambiental, en la Partida de Basseta Blanca, del término municipal de Riba-Roja del Túria (Valencia), toda vez que se trata de un Vertedero de titularidad privada, ajeno al Servicio Público de Tratamiento de Residuos Urbanos que esta Entidad Metropolitana presta. Por todo lo cual esta Entidad Metropolitana no puede ser el sujeto responsable, de las presuntas infracciones cometidas por los titulares de dicho Vertedero privado, al cual la EMTRE no tiene ni siquiera acceso, desconociendo absolutamente el sistema de gestión de la clausura de ese Vertedero de Basseta Blanca, competencia que en cualquier caso habría de estar supervisada por la Autoridad Ambiental. Razones, todas ellas, por las que esta Entidad no puede ser requerida para subsanar las irregularidades existentes en dicho vertedero privado.

SEGUNDA. Al objeto de clarificar ante esa Dirección General el conocimiento del que esta Administración dispone, en relación con el Vertedero de Basseta Blanca (Riba-Roja del Turia), se relatan los hechos conocidos por esta Entidad Local:

1. El Ayuntamiento de Valencia suscribió en fecha 5 de noviembre de 1986 el Contrato del Servicio de Residuos Sólidos (Explotación del Vertedero Controlado de Residuos Sólidos ubicado en Basseta Blanca Ribarroja del Turia), con el titular de dicho vertedero [REDACTED]

2. El posteriormente extinto Consell Metropolità de l'Horta (CMH), fue una Entidad Local creada por la Generalitat Valenciana mediante Ley 12/1986, de 31 de diciembre de 1986.

3. Con fecha 30 de abril de 1990 se formalizó Convenio específico para la transferencia de activos afectos al servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos, entre el Ayuntamiento de Valencia y el Consell Metropolita de l'Horta (CMH), en virtud del cual el Consell Metropolita de l'Horta se subrogó en el lugar del Ayuntamiento de Valencia, respecto del Contrato del Servicio de Residuos Sólidos, suscrito en su día con el titular de dicho vertedero [REDACTED]

4. En Julio de 1996, concluido el plazo contractual de diez años, el Consell Metropolità de l'Horta (CMH) dejó de utilizar el Vertedero de Basseta Blanca, cesando por lo tanto en dicha fecha, las deposiciones de aquella administración en ese vertedero.

5. La Entidad Local Consell Metropolità de l'Horta, fue disuelta por la Generalitat Valenciana, mediante la Ley 8/1999, de 3 de diciembre, por la que se suprime el Área Metropolitana de l'Horta.

6. , Muy posteriormente, la Generalitat Valenciana creó, esta Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE), vía disposición adicional segunda de la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de Áreas Metropolitanas en la Comunidad Valenciana.

Del anterior relato de hechos se infieren las siguientes conclusiones:

A. Tanto el Ayuntamiento de Valencia (hasta 1990), como posteriormente el extinto Consell Metropolità de l'Horta (hasta julio de 1996), estuvieron utilizando durante diez años y sin carácter exclusivo, un Vertedero de titularidad privada propiedad de [REDACTED].

B. Lo que haya ocurrido en el Vertedero de Basseta Blanca desde julio de 1996 hasta la fecha, incumbe y es responsabilidad única y absoluta del titular de dicho vertedero privado o, en su caso, de sus herederos.

C. Esta Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) es completamente ajena a cualquier hecho, del que se pueda derivar responsabilidad alguna en relación a la imputación de hechos acaecida.

TERCERA. El Pleno del Ayuntamiento de Valencia, en sesión celebrada el día 26 de abril de 1990, adoptó el acuerdo de transferir al Consell Metropolità de l'Horta todos los activos afectos al Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos, entre los que se encontraba el contrato de explotación del vertedero de Basseta Blanca en el término municipal de Riba-Roja del Turia.

Efectivamente, en este caso, lo que se transfirió no fue la titularidad del vertedero, sino el contrato, como expresamente contempla el "Convenio específico entre el Ayuntamiento de Valencia y el Consell Metropolità de l'Horta para la transferencia a este último organismo de los activos afectos al servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos", y cuya ESTIPULACIÓN TERCERA dispone:

"El Consell Metropolità de l'Horta se subroga en el lugar del Ayuntamiento de Valencia en todos los derechos y obligaciones que se deriven, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, del CONTRATO DEL SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS –explotación del vertedero controlado de Residuos Sólidos ubicado en Basseta Blanca (Riba-Roja del Turia) con previo acondicionamiento de los terrenos-suscrito con [REDACTED] el 5 de noviembre de 1986".

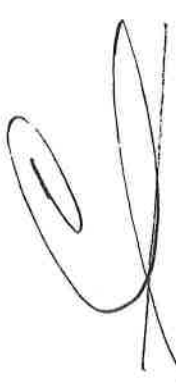
Como Anexo nº 7 del Convenio se da cumplimiento al trámite de audiencia al Ayuntamiento de Ribarroja. Y como Anexo nº 8 figura la Comparecencia de [REDACTED], dueño y titular del vertedero, que es informado del contenido del Convenio y como afectado directamente por la firma de dicho Convenio, al tener firmado con el Ayuntamiento de Valencia el contrato para la explotación del vertedero, presta su conformidad a la subrogación del Consell Metropolità de l'Horta (CMH) en lugar del Ayuntamiento de Valencia en la ejecución de dicho contrato.

Se adjunta el Convenio y Anexos como **DOCS. NÚM. 1, 2 y 3.**

Además, debemos destacar que este contrato con [REDACTED] en el que se subrogó el CMH en el lugar del Ayuntamiento de Valencia, como se dice en el escrito de requerimiento que nos ha remitido la Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda, finalizó el 30 de junio de 1996 con el cierre del vertedero. Por tanto, extinguido el contrato, se extinguió toda relación del Consell Metropolità de l'Horta (y con más motivos la de la EMTRE) con el vertedero de Basseta Blanca.

CUARTA. En cuanto a la responsabilidad de la EMTRE como sucesora del extinto Consell Metropolità de l'Horta, hemos de manifestar que no se puede imputar a esta Entidad Metropolitana la responsabilidad sobre unos hechos, a los que resulta completamente ajena y que no tiene obligación legal alguna de vigilar, como hemos dicho anteriormente.

En efecto, esta Entidad Metropolitana es la Administración competente para la *"la prestación de los servicios de valoración y eliminación de residuos urbanos"* a los municipios del Área Metropolitana de Valencia, ya que así define el ámbito competencial de esta Entidad Metropolitana el punto núm. 2 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana (DOGV núm. 4001 de 11/05/2001). Siendo cierta dicha afirmación, lo es a partir de la fecha de creación de la EMTRE, el año 2001.



En cuanto a que la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos es la sucesora del extinto Consell Metropolità de l'Horta, hemos de manifestar que lo es parcialmente; solamente en la parte referida a los medios patrimoniales, materiales, financieros y de personal en los que esta Entidad Metropolitana se subrogó para el ejercicio de la referida competencia, en virtud de los Acuerdos del Gobierno Valenciano de 8 de Enero de 2002 y de 26 de marzo de 2002, por el que se aprobaron las propuestas de transferencia del personal y de los bienes, derechos y obligaciones del extinto Consell Metropolità de l'Horta a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos.

Estos acuerdos del Gobierno Valenciano, fueron materializados en el Acta de fecha 17 de Abril de 2002, por el que se procede a la Transferencia de personal, bienes, derechos y obligaciones del extinto Consell Metropolità de l'Horta a las Entidades Metropolitanas creadas al amparo de la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana. Cuando acudimos al Anexo II A), referido a los bienes derechos y obligaciones del extinto Consell Metropolità de l'Horta que se transfieren a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, se observa que dentro del inmovilizado material que se transfiere, aparecen los Vertederos de Sogrony (Llombay) y Pico de los Cuervos (Sagunt), pero en ningún caso aparece el Vertedero de Basseta Blanca (Ribarroja del Turia). Por ello mismo, la EMTRE tiene muy claro que es responsable de lo que pueda suceder en los vertederos transferidos de Sogrony (Llombay) y Pico de los Cuervos (Sagunt), no así de lo que pueda acaecer en un Vertedero que nunca se le transfirió.

Se adjunta como **DOC. NÚM 4** copia del Acta y Anexo de Transferencias)

En definitiva esta Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos no es sucesora universal del Consell Metropolita de l'Horta, solamente lo es de aquellos activos para el tratamiento de residuos que le fueron expresamente transferidos, entre los que no estaba el Vertedero de Basseta Blanca (Riba-Roja)

Es decir, el Vertedero de Residuos Urbanos de Basseta Blanca (Ribarroja del Turia) no fue un bien (activo inmovilizado material) transferido del antiguo Consell Metropolita de l'Horta a esta Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, por la sencilla razón de que el Vertedero de Residuos Urbanos de Basseta Blanca (Ribarroja del Turia), nunca fue un Vertedero perteneciente al Consell Metropolita de l'Horta, fue siempre un Vertedero privado. De hecho, este Vertedero nunca figuró en el inventario de bienes del Consell Metropolita de l'Horta, y por ende, jamás ha figurado en el inventario de bienes de esta Entidad Metropolitana.

QUINTA. Finalmente, queremos dejar claro en este punto concreto que la falta de responsabilidad del CMH (y no digamos la de la EMTRE) en las irregularidades o incidencias existentes en el vertedero de Basseta Blanca objeto del presente requerimiento, ya fue reconocida por la Jefa del Área de Residuos de esa Dirección General de Calidad mediante escrito de fecha 3 de enero de 2006 dirigido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (que se adjunta como **DOC. NÚM 5**), por el que se exculpa de toda responsabilidad a las Administraciones (y entre ellas, a la Entidad Metropolitana), ya que, dice, ***"el citado vertedero no dispone de autorización, ni proyecto de sellado, ni mantenimiento post-clausura por haberse producido su cierre en fecha 30 de junio de 1996 y, por tanto, con anterioridad a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, así como al Real Decreto 1481, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero"***.

Y añade la Jefa del Área de Residuos: *"No obstante, se da traslado de su escrito a la EMTRE, administración competente sucesora del extinto Consell Metropolita de l'Horta, a los efectos oportunos"*. Pero, evidentemente, la competencia de la EMTRE en materia de residuos, en los términos y con el alcance fijado por la ley, es una cosa, y otra muy distinta es la responsabilidad sobre los daños producidos por un vertedero privado, como es el caso del vertedero de Basseta Blanca, propiedad y titularidad de [REDACTED] y, tras su fallecimiento, de sus herederos.

Esta falta de responsabilidad de la Administración Metropolitana, derivada del hecho de no ostentar la propiedad ni la titularidad del vertedero privado, fue siempre tan evidente que el 28 de diciembre de 1993, al haber declarado el Ayuntamiento de Ribar-Roja del Turia caducada la licencia concedida en su día para la actividad del vertedero, la propia Consellería de Medio Ambiente, mediante carta del conceller Emèrit Bono, le notificó a ese Ayuntamiento su compromiso para elaborar el proyecto de sellado y restauración del vertedero en el próximo año (1994), para lo cual aportaría los medios técnicos y personales necesarios para que dicha restauración se ejecutara.

Se adjunta copia de la carta y notificación del Conseller como **DOC. NÚM. 6**.

Y en virtud de lo anteriormente expuesto es por lo que se


SOLICITA:

PRIMERO: Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito, se sirva tener por presentadas las Alegaciones contra el requerimiento de fecha 5 de julio de 2012, del Director General de Calidad Ambiental de la Conselleria D'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana

por el que se emplaza a esta Entidad para que en plazo de un mes se acrediten las actuaciones relativas al estado actual del vertedero sito en la partida de Basseta Blanca, en el término municipal de Riba-roja del Turia (Valencia), así como las medidas correctoras que proceda adoptar

SEGUNDO: Sean estimadas las presentes Alegaciones y, en su virtud, se anule y deje sin efecto el requerimiento por el que se por el que se emplaza a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos para que en plazo de un mes se acrediten las actuaciones relativas al estado actual del vertedero sito en la partida de Basseta Blanca, en el término municipal de Riba-roja del Turia (Valencia), así como las medidas correctoras que proceda adoptar al respecto.

Valencia a veintisiete de julio de dos mil doce.



emtre
entitat metropolitana per
al tractament de residus
PRESIDENCIA *M. Àngels*

Fdo: M^a Àngels Ramón-Llin Martínez
Presidenta

**SR. PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT
GENERALITAT VALENCIANA
C/ Francesc Cubells, 7
46011-VALENCIA**

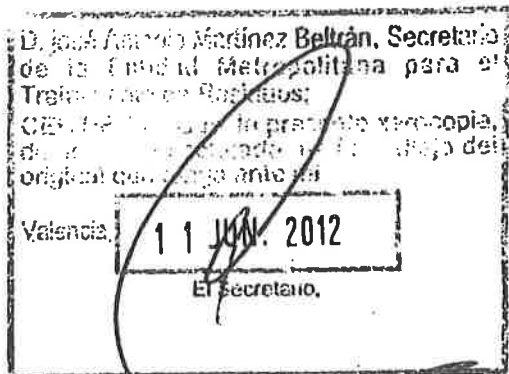
DOC. 1



AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



AREA METROPOLITANA DE VALENCIA



CONVENIO ESPECIFICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y EL
CONSELL METROPOLITA DE L'HORTA PARA LA TRANSFERENCIA A ESTE
ULTIMO ORGANISMO DE LOS ACTIVOS AFECTOS AL SERVICIO DE
TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS

Valencia, a treinta de Abril de mil novecientos noventa.

REUNIDOS

La Ilma. Sra. D^a. Clementina Ródenas Villena, Alcaldesa Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Valencia, asistida del Secretario General de la Corporación Municipal, D. Rafael Arnanz Delgado.

Y D. Antonio Cubillos Royo, Vicepresidente primero del Consell Metropolità de l'Horta, asistido del Secretario General de la Corporación Metropolitana, D. Juan José Corral Garcia.

Actuando ambos en el ejercicio de sus respectivos cargos y con la representación que ostentan, reconociéndose ambos competentes para la suscripción del presente documento en virtud de las autorizaciones otorgadas por los Organos de Gobierno correspondientes de ambas Administraciones Públicas, con fechas veintiseis y seis de Abril de mil novecientos noventa respectivamente,

CONSELL
METROPOLITA
DE L'HORTA
SECRETARIA GENERAL



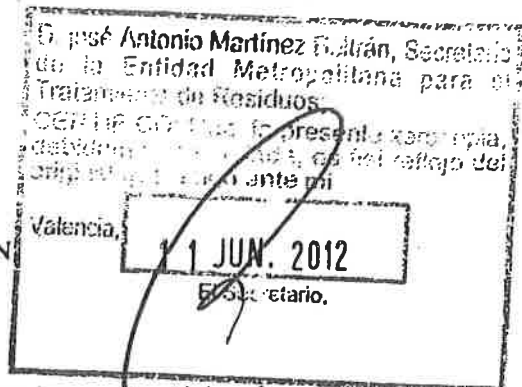
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA



AREA METROPOLITANA DE VALENCIA



MANIFIESTAN



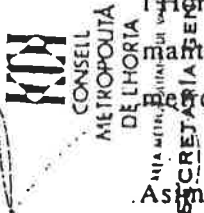
I.- El pasado 28 de Julio de 1989 El Ayuntamiento de Valencia y el Consell Metropolità de l'Horta suscribieron un CONVENIO-MARCO DE COLABORACION a fin de hacer posible la organización metropolitana de una serie de servicios públicos -entre los que se encuentra el Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos- en cumplimiento de la Ley 12/86 de la Generalitat Valenciana de creación del Consell Metropolità de l'Horta y consiguiente atribución competencial a este organismo.

II.- Dicho Convenio-Marco reconoce que compete al Consell Metropolità de l'Horta la prestación, entre otros, del Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos y que el Ayuntamiento de Valencia transferirá al Consell Metropolità de l'Horta los bienes materiales y personales vinculados a dicho Servicio, que deberán mantener esa vinculación al empezar a ejercerse sobre ellos la competencia metropolitana.

Asimismo, el Consell Metropolità de l'Horta se subroga en el lugar del Ayuntamiento de Valencia en todos los derechos y obligaciones que, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, sean inherentes a la prestación del Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos y los que se deriven de los bienes que a través de la transmisión vienen a adquirir naturaleza metropolitana.

III.- El Convenio-Marco establece también que su desarrollo se llevará a cabo a través de Convenios Específicos para cada Servicio, en los cuales se formalizarán y explicitarán las transferencias materiales de bienes e instalaciones y, en su caso, la de los medios personales adscritos al servicio y que sean consustanciales al mismo.

El Convenio Específico deberá hacer constar también la fecha de entrada en vigor del inicio del ejercicio de las competencias a que se refiere, por parte del Consell





AYUNTAMENT DE VALÈNCIA

CONSELL
METROPOLITÀ
DE L'HORTA

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA



Metropolità de l'Horta, así como la correspondiente asunción de responsabilidades del mismo como prestatario del Servicio.

En consecuencia, en desarrollo del aludido Convenio-Marco, es objeto del presente Convenio Especifico hacer de titularidad metropolitana los activos del Ayuntamiento de Valencia afectos al Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos que se acuerda y conviene en base a las siguientes

Eliminación de Residuos Sólidos
José Antonio Martínez Botrán, Secretario
Entidad Metropolitana para el
Servicio de Residuos
Con la presente se certifica
que la presente copia, es fiel reflejo del
original que se encuentra en el
Valencia, 1 JUN. 2012
El Secretario,

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Valencia transfiere al Consell Metropolità de l'Horta la totalidad de su participación accionaria en la empresa FERYASA (Compañía Valenciana de Fertilizantes, S.A.). Dicha participación, constituida por un paquete de 34.983 acciones de 5.000 pesetas, deberá causar baja en el Inventario del Patrimonio Municipal y alta en el Inventario del Consell Metropolità de l'Horta.

SEGUNDA.- El Consell Metropolità de l'Horta se subroga en lugar del Ayuntamiento de Valencia en todos los derechos y obligaciones que se deriven, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, del CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE UN VERTEDERO CONTROLADO PARA ESCOMBROS Y OTROS RESIDUOS SOLIDOS INERTES en Paterna (El Rabosar), suscrito con el empresa HERMANOS ANDUJAR Y NAVARRO S.L. el 29 de Julio de 1.987.

Asimismo, se transfiere al Consell Metropolità de l'Horta la titularidad de la báscula de pesaje, actualmente municipal, y que seguirá ostentando el Consell Metropolità de l'Horta al final de la relación contractual, de acuerdo con el artículo tercero del pliego de condiciones técnicas que rigió el concurso público mediante el cual se adjudicó el mencionado contrato. Este activo causará baja en el inventario municipal y alta en el del Consell Metropolità de l'Horta.

TERCERA.- El Consell Metropolità de l'Horta se subroga en el lugar del Ayuntamiento de Valencia en todos los derechos y obligaciones que se deriven, a

CONSELL
METROPOLITÀ
DE L'HORTA
SECRETARIA GENERAL



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

CONSELL
METROPOLITÀ
DE L'HORTA

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA



partir de la entrada en vigor del presente Convenio, del CONTRATO DEL SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS -explotación del vertedero controlado de Residuos Sólidos ubicado en Basseta Blanca (Ribarroja del Turia) con previo acondicionamiento de los terrenos- suscrito con D^a [REDACTED] el 5 de Noviembre de 1.986.

original
11 JUN. 2012

CUARTA.- El Consell Metropolità de l'Horta se subroga en el lugar del Ayuntamiento de Valencia en todos los derechos y obligaciones derivados del Convenio para solucionar los problemas de los Residuos Sólidos procedentes de la Ciudad de Valencia, a que se refieren los acuerdos de los Plenos del Ayuntamiento de Valencia y de Ribarroja del Turia de fechas 18 y 15 de Septiembre de 1.986, respectivamente.

QUINTA.- Se traspasa al Consell Metropolità de l'Horta los siguientes cuatro puestos de trabajo del personal funcionario cuyo desempeño es consustancial con la prestación del Servicio Público de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos y que, en consecuencia, causarán baja en la plantilla municipal:

- Plaza de Ingeniero Técnico Industrial; categoría: Técnico Medio
- Plaza de Encargado limpieza Residuos Sólidos-Pesador; categoría: maestro
- Plaza de Encargado limpieza Residuos Sólidos-Pesador; categoría: maestro.
- Plaza de Encargado limpieza Residuos Sólidos-Pesador; categoría: maestro.

Los actuales titulares de los puestos de trabajo que se transfieren al Consell Metropolità de l'Horta podrán optar, antes del 31 de Diciembre de 1990, por continuar ocupando dichas plazas pasando a integrarse como funcionarios de la citada Administración Metropolitana, sin que ello pueda suponer merma alguna en sus retribuciones por razón de dicha transferencia. En el caso de que dichos titulares no acepten la integración, el Consell Metropolità de l'Horta decidirá sobre el mantenimiento o no en su plantilla de los puestos mencionados tal como se han definido, y el Ayuntamiento resolverá respecto de los actuales titulares, o bien la

CONSELL
METROPOLITÀ
DE L'HORTA
ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA
SECRETARIA GENERAL



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

CONSELL
METROPOLITÀ
DE L'HORTA

ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA



excedencia forzosa o una modificación de plantilla que les permita continuar como funcionarios municipales.

D. José Antonio Martínez Beltrán, Secretario de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos;
CERTIFICO que el presente xerocopia, debidamente otorgada, es fiel reflejo del original.

Valencia,

11 JUN. 2012

El Secretario,

SEXTA.- El Consell Metropolità de l'Horta iniciará el ejercicio de las competencias a que se refiere este Convenio Específico el día siguiente al de la fecha de suscripción de las Actas de recepción a que hace referencia la cláusula duodécima.

El Ayuntamiento de Valencia reconoce las deudas contraídas hasta la fecha con las empresas afectas al Servicio y, dada su incidencia en los planes de actuación a que se refiere la estipulación siguiente, asume el compromiso de efectuar su pago según el calendario de financiación establecido en documentación anexa.

SEPTIMA.- El Consell Metropolità de l'Horta garantiza a los usuarios del término municipal de Valencia el nivel de prestación del Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos y procurará mejorar la eficiencia y la calidad de los mismos, aprovechando las economías de escala que se generen con la metropolización de éstos.

Igualmente se indican las actuaciones últimas previas a la culminación de las transferencias, así como los estudios técnico-económicos precisos para definir los planes de actuación, tanto en inversión como en tarifas y en formas de prestación del Servicio.

OCTAVA.- La financiación del Servicio de Tratamiento y Eliminación de los Residuos Sólidos corresponde al Consell Metropolità de l'Horta, que cubrirá mediante subvención el posible déficit de explotación del mismo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 65/1988 de 9 de Mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana de desarrollo de la Ley 12/1986, de 31 de Diciembre de creación del Consell Metropolità de l'Horta, la Administración Metropolitana podrá incrementar la aportación anual de aquellos Municipios a los que se preste el Servicio, como consecuencia del proceso de Metropolización que ahora se inicia, distribuyendo el déficit de explotación del Servicio entre ellos, en

CONSELL
METROPOLITÀ
DE L'HORTA

SECRETARIA GENERAL



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA



ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA



función del uso del mismo y de forma que se garantice el equilibrio financiero de las empresas.

Serán asumidos por el Consell Metropolità de l'Horta los incrementos de coste con relación al de 1.989, en términos reales, producidos por la adaptación del Servicio a la dimensión metropolitana y/o por su generalización al conjunto del Area Metropolitana.

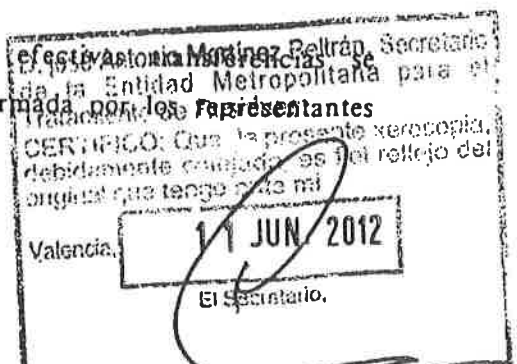
NOVENA.- En el caso de que la explotación del Servicio obtuviera beneficios, éstos o los correspondientes al capital público en el supuesto de gestión mixta, se destinarán íntegramente a compensar o disminuir cualquier cánon o aportación desembolsada, o a desembolsar, por los Ayuntamientos, ya sea para realizar nuevas inversiones, amortizar el endeudamiento de la empresa o financiar los capitales invertidos por el Consell Metropolità de l'Horta.

DECIMA.- Las transferencias a que se refiere este Convenio no comportarán desembolso alguno para el Ayuntamiento de Valencia singularmente considerado.

De la misma manera, el Consell Metropolità de l'Horta no efectuará desembolso alguno relativo a costes producidos, antes de culminar las transferencias, por la generación de los bienes del presente Convenio.

UNDÈDIMA.- Previamente a la suscripción del presente Convenio, el Ayuntamiento de Valencia y el Consell Metropolità de l'Horta cumplirán los requisitos que sean necesarios en relación a terceros interesados, dando además cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula segunda del Convenio-Marco de colaboración entre ambas instituciones de 28 de Julio de 1.989.

DUODÈCIMA.- Suscrito el presente Convenio, las entidades suscritoras formalizarán mediante Acta de entrega y recepción, firmada por los representantes autorizados de cada una de las instituciones.





AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA



ÀREA METROPOLITANA DE VALÈNCIA



La relación de documentos anexos al presente convenio es la siguiente:

- Anexo nº 1 - Certificado del Secretario del Consejo de Administración de FERVASA
- Anexo nº 2 - Certificado de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Valencia
- Anexo nº 3 - Estados financieros de la empresa FERVASA.
- Anexo nº 4 - Extracto del Estudio de Viabilidad Técnico-Económico para el Tratamiento de R.S.U. del Area Metropolitana de l'Horta.
- Anexo nº 5 - Metodología para la formulación de un sistema tarifario de los Servicios Metropolitanos.
- Anexo nº 6 - Estudio de la deuda municipal pendiente y calendario de pago.
- Anexo nº 7 - Cumplimiento del trámite de audiencia al Ayuntamiento de Ribarroja.
- Anexo nº 8 - Comparecencia de [REDACTED]
- Anexo nº 9 - Comparecencia de [REDACTED]

Así lo convienen en lugar y fecha "ut supra" indicados.

Por el Ayuntamiento de Valencia

Por el Consell Metropolità de l'Horta

Clementina Ródenas Villena
ALCALDESA

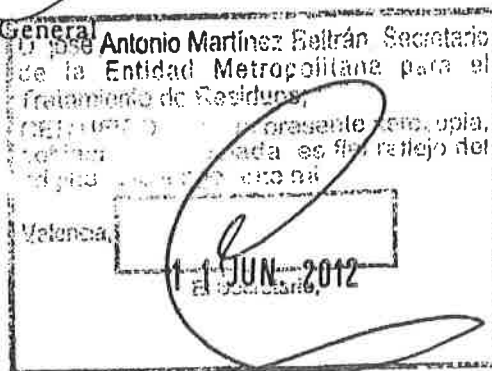
Antonio Cubillos Royo
VICEPRESIDENTE

Ante mí

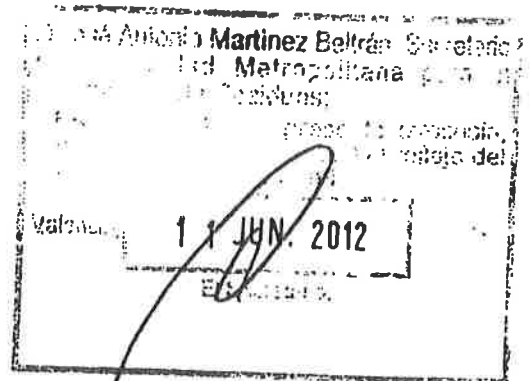
Ante mí

Rafael Arnaz Delgado
Secretario General

Juan José Corral García
Secretario General



DOC. 2



ANEXO Nº 7

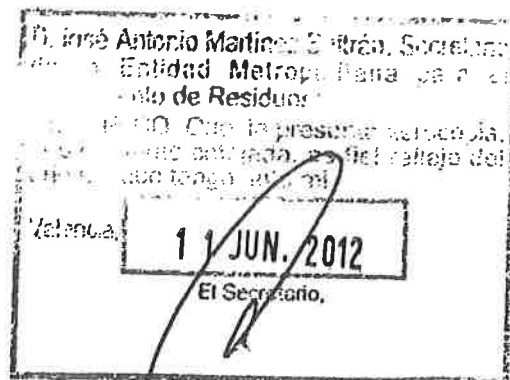
CUMPLIMIENTO DEL TRAMITE DE AUDIENCIA AL AYUNTAMIENTO DE
RIBARROJA


CONSELL
METROPOLITÀ
DE L'HORTA
AJUNTAMENT METROPOLITÀ DE VALENCIA
SECRETARIA GENERAL



REGISTRE GENERAL
DATA - 7 MAR 1990
EIXIDA N.º 385

Sr. D. Juan Antonio Toledo Gómez
Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ribarroja del Turia
VALENCIA



Valencia, 6 de marzo de 1990.

Estimado amigo:

En relación con lo establecido en la conversación personal que mantuvimos en tu despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ribarroja, adjunto te remito copia del Acuerdo-Marco suscrito entre el Ayuntamiento de Valencia y el Consell Metropolità de l'Horta el pasado 28 de julio de 1989 y borrador de Convenio específico entre las mismas instituciones para la transferencia al CMH del Servicio Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos, en cuya cláusula cuarta se menciona la subrogación de la Administración Metropolitana en todos los derechos y obligaciones derivados del Convenio que, en su día, suscribieron los Ayuntamientos de Valencia y Ribarroja.

En coherencia con el nuevo espíritu, ya comentado entre nosotros, que anima al CMH en relación a este servicio de eliminación de basuras y las instalaciones ubicadas en el término municipal de Ribarroja, te traslado la voluntad del CMH de contar con la aquiescencia de tu Ayuntamiento a la transferencia que se plantea, convencido de que con tu conformidad y la del Ayuntamiento que presides podremos iniciar una nueva etapa de estrecha y fructífera cooperación mutua.

Recibe un cordial saludo



AREA METROPOLITANA DE VALENCIA
Fdo: Francisco Cholvi Puig
GERÈNCIA

Gerente

DOC. 3



D. José Antonio Martínez Beltrán, Secretario de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos:

CERTIFICO. Que la presente acta es debidamente aprobada por el Consejo de Administración de la Entidad.

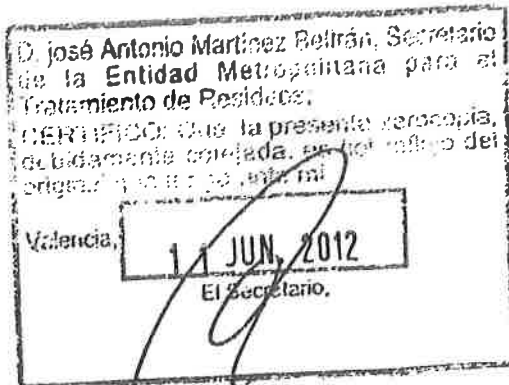
Valencia, 11 JUN. 2012

El Secretario,

ANEXO Nº 8

COMPARECENCIA DE [REDACTED]

CONSELL
METROPOLITÀ
DE L'HORTA
ATA METROPOLITÀ DE VALÈNCIA
SECRETARIA GENERAL



COMPARECENCIA

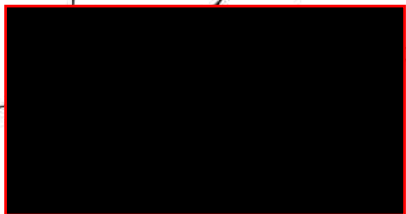
En la Sede del Consell Metropolità de L'Horta sita en Valencia, Plaza del Ayuntamiento nº 9, planta 6ª, siendo las 12 horas del día 1 de Marzo de 1990, comparece en nombre propio D. [REDACTED], mayor de edad, vecino de Ribarroja del Turia (Valencia), [REDACTED] y MANIFIESTA:

1ª.- Que teniendo conocimiento de la próxima firma del Convenio específico entre el Ayuntamiento de Valencia y el Consell Metropolità de L'Horta, que tiene como objetivo metropolizar el servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos, en desarrollo del Convenio-marco de colaboración, suscritos entre ambos organismos el 28 de Julio de 1989.


2ª.- Que el compareciente está afectado directamente, por la firma de dicho Convenio específico, al tener firmado con el Ayuntamiento de Valencia, con fecha 5 de noviembre de 1986, un contrato de Servicios de Residuos Sólidos - explotación de vertedero controlado de Residuos Sólidos ubicado en Basseta Blanca (Ribarroja de Turia) con un plazo de ejecución de 10 años.

3ª.- Que presta su conformidad con la subrogación del Consell Metropolità de L'Horta en lugar del Ayuntamiento de Valencia en la ejecución de dicho contrato de Servicios, tal y como se establece en la Cláusula TERCERA del Convenio específico para la transferencia al Consell Metropolità de L'Horta de los Activos afectos al Servicio de tratamiento y eliminación de Residuos Sólidos.

Lo cual, firma en prueba de conformidad ante mi, FRANCISCO CHOLVI PUIG, GERENTE del Consell Metropolità de L'Horta.



EL GERENTE



CONSELL
METROPOLITÀ
DE L'HORTA
ÀREA METROPOLITÀNA DE VALENCIA
GERÈNCIA



CONSELLERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Doc. 4

**ACTA POR LA QUE SE PROCEDE A LA TRANSFERENCIA DE PERSONAL,
BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EXTINTO CONSELL
METROPOLITÀ DE L'HORTA A LAS ENTIDADES METROPOLITANAS
CREADAS AL AMPARO DE LA LEY 2/2001, DE 11 DE MAYO, DE CREACIÓN Y
GESTIÓN DE AREAS METROPOLITANAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA**

En Valencia, a las 17:00 horas del día 17 de abril de 2002, en la sede de la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas:

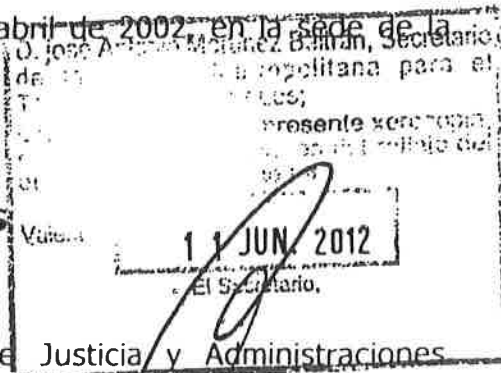
REUNIDOS

D. Carlos González Cepeda, Conseller de Justicia y Administraciones
Públicas;

D. Enrique Crespo Calatrava, Presidente de la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos

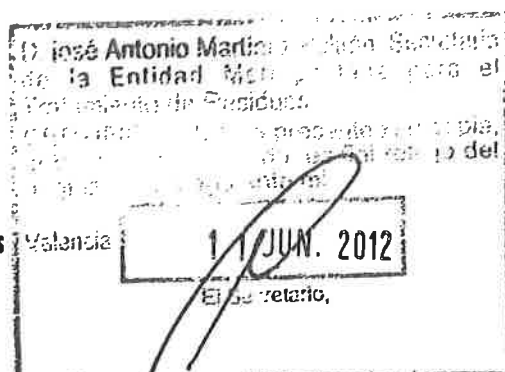
D^a M^a Jesús Puchalt Farinós, Presidenta de la Entidad Metropolitana para
el Tratamiento de Residuos

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 8/1999, de 3 de
diciembre, de la Generalitat Valenciana por la que se suprime el Area Metropolitana
de l'Horta, y teniendo en cuenta que por las Disposiciones Adicionales Primera y
Segunda de la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y Gestión de Areas
Metropolitanas de la Comunidad Valenciana se crearon respectivamente la Entidad





CONSELLERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



Metropolitana de Servicios Hidráulicos y la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos.

Visto el Acuerdo de Gobierno Valenciano de fecha 26 de marzo de 2002,

ACUERDAN

PRIMERO.- Efectuar las siguientes transferencias:

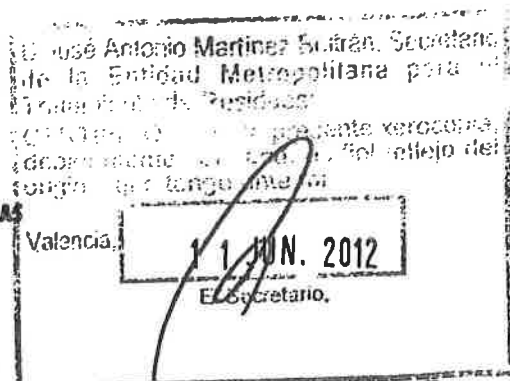
- I.- Transferencia del personal del extinto CMH a los nuevos Entes Metropolitanos
- II.- Transferencia de bienes, derechos y obligaciones del extinto CMH al nuevo Ente Metropolitano para el Tratamiento de Residuos.
- III.- Transferencia de bienes, derechos y obligaciones del extinto CMH al nuevo Ente Metropolitano de Servicios Hidráulicos.
- IV.- Transferencia del extinto CMH de bienes proindivisos a los nuevos Entes Metropolitanos

SEGUNDO.- Entregar la documentación que a continuación se detalla:

- ♦ Acuerdo del pleno del Consell de la reunión de 26 de marzo de 2002
- ♦ Informe auditoría sobre la revisión, y actualización del Inventario de Bienes y Derechos del Consell Metropolità de l'Horta de cara a la transferencia de su patrimonio a las futuras entidades monofuncionales metropolitanas de servicios hidráulicos y de tratamiento de residuos.



CONSELLERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



- ♦ Informe auditoría financiera independiente.
- ♦ Informe auditoría sobre personal del extinto Consell Metropolità de l'Horta.

TERCERO.- Promover la constitución de la Comisión de Planificación y Coordinación Autonómicas a la que se refiere el artículo 15 de la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y Gestión de Areas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana, en el plazo de un mes.

CUARTO.- El contenido de las transferencias relacionadas en el punto Primero así como la documentación a que se hace referencia en el punto Segundo, se entregan como Anexos de la presente Acta.

En prueba de conformidad con lo expuesto, firman las partes la presente Acta, por triplicado ejemplar en el lugar y fecha al principio indicados.

EL CONSELLER DE JUSTICIA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Carlos González Cepeda

SR. PRESIDENTE DE LA ENTIDAD
METROPOLITANA DE SERVICIOS
HIDRÁULICOS

Enrique Crespo Calatrava

SRA. PRESIDENTA DE LA ENTIDAD
METROPOLITANA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Ma Jesús Puchalt Farinós

COMISIÓN PARITARIA
Ley 8/1999 de la Generalitat Valenciana

12
D. José Antonio Martínez
Entidad Metropolitana para el
tratamiento de Residuos;
D. Juan José Martínez
D. Juan José Martínez
Valencia, 1 JUN. 2012
El Secretario.

TRANSFERENCIA
DEL
EXTINTO C.M.H.
AL
ENTE METROPOLITANO
PARA EL TRATAMIENTO DE
RESIDUOS

COMISIÓN PARITARIA
Ley 8/1999 de la Generalitat Valenciana

José Antonio Martínez Barrán, Secretario
Entidad Metropolitana para el
Tratamiento de Residuos
presente del 3^a copia,
de la fecha del ratario del

Valencia,

11 JUN. 2012

El Secretario,

-A-

Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos

ACTIVO

INMOVILIZADO MATERIAL

DESCRIPCIÓN	BIEN	PTAS	EUROS
Ampliación Instalaciones RSU	Parcela/Inmueble	15.500.000	93.156,88
Maquinaria y Elementos de Transporte	Bienes Muebles	148.107.030	890.141,18
Vertedero Sogrony	Parcela/Inmueble	32.193.379	193.486,10
Planta Hornillos	Obras/Inmueble	86.060.721	517.235,35
Vertedero Pico de los Cuervos	Obra/Parcela/Inmueble	324.943.932	1.952.952,36
Total		606.805.062	3.646.971,87

INMOVILIZADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	BIEN	PTAS	EUROS
Acciones FERVASA	Acciones/Mobiliario	176.050.000	1.058.081,81
Total		176.050.000	1.058.081,81

DEUDORES

DESCRIPCIÓN	PTAS	EUROS
Varios	2.167.557.676	13.027.284,00
Total	2.167.557.676	13.027.284,00

CUENTAS DE ORDEN

• **AVALES**

EMPRESA	PTAS	EUROS
DELTA AGRICOLA, S.A.	200.000	1.202,02
ESTUDIOS PROYECTOS Y PLANIFICACION, S.A.	399.952	2.403,76
INGENIERIA 10, S.A.	249.894	1.501,89
INGENIERIA Y TECNOLOGIA, GHESA.	389.335	2.339,95
IVA-LEYING, S.A.	70.913	426,20
LUIS BATALLA, LUBASA, S.A.	8.332.652	50.080,25
SORIANO POLICARPO, JOSE	14.000.000	84.141,69
UTE S.A.V.-F.C.C.	120.000.000	721.214,53
Total	143.642.746	863.310,29

COMISIÓN PARITARIA

Ley 8/1999 de la Generalitat Valenciana

14

D. José Antonio Martínez Ibáñez, Secretario
de la Entidad Metropolitana para el
Manejo de Residuos;
Por lo tanto, con la presente se declara
que el presente acta es el resultado del
trabajo de la Comisión Paritaria.
Valencia, 11 JUN. 2012
El Secretario,

PASIVO

LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

• PRÉSTAMOS RECIBIDOS

DESCRIPCIÓN	PTAS	EUROS
Préstamos a largo plazo	111.111.114	667.791,24
Total	111.111.114	667.791,24

CORTO PLAZO

• ACREEDORES

CONCEPTO	PTAS	EUROS
Varios	2.212.725,213	13.298.746,37
TOTAL	2.212.725,213	13.298.746,37

DOE. 5

DOCUMENTO N.º 1



GENERALITAT
VALENCIANA

CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE
DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL JÚCAR
000894 - 13. ENE 2006
REGISTRO GENERAL DE ENTRADA
HORA:

Francesc Cubells, 7
46011 VALÈNCIA
Apt. de Correus-22105
Telèfon 96 197 38 78
Fax 96 197 35 22

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE TERRITORI I HABITATGE
DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL
Registre General - 208

Fecha 10 ENE. 2006

SALIDA 594

D. Manuel Torán Busutil
Jefe de Área de Calidad de las Aguas y
Gestión Medioambiental
Confederación Hidrográfica del Júcar
Avda. Blasco Ibañez 48
46010 Valencia

Valencia, 3 de enero de 2006

Por medio de la presente le informo respecto a su escrito de fecha 14 de noviembre de 2005, referente a la existencia de vertidos de lixiviados procedentes del antiguo vertedero del Excmo. Ayuntamiento de Valencia sito en el término municipal de Riba-roja, que el citado vertedero no dispone de autorización, ni proyecto de sellado, ni mantenimiento post-clausura por haberse producido su cierre en fecha 30 de junio de 1996, y por tanto, con anterioridad a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, así como al Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito, en vertedero.

No obstante, se da traslado de su escrito a la EMTRE, administración competente sucesora del extinto Consell Metropolità del Horta, a los efectos oportunos.

JEFA DEL AREA DE RESIDUOS


Carmen de Rosa Torner

[Handwritten signature]

D. José Antonio Martínez Beltrán, Secretario
de la Corporación Metropolitana para el
Tratamiento de Residuos
CEPTUR 1001, la presenta por el
deberes y calidad de la Corporación del
origen.

Valencia, 1 JUN. 2012

El Secretario,

GENERALITAT
VALENCIANA

REGISTRAT VALÈNCIANA
CORPORACIÓ DE AVALUACIÓ

Registre General

Data 21 DIC. 1993 /

EIXIDA 14790 / 06

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE RIBA-ROJA DE TURIA
46190 RIBA-ROJA DE TURIA
VALENCIA

RECIBO DE LA
CORPORACIÓN METROPOLITANA
DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Nº 66

Valencia, 28 de diciembre de 1993

Estimado amigo:

Conocida la Resolución dictada por esa Alcaldía, en relación al expediente del vertedero de basuras de Basseta Blanca, en la que manifiesta en el punto 1 de la misma declarar caducada la licencia y ordenar el cierre inmediato del antedicho vertedero, he de manifestarte una cierta perplejidad y desazón con el resultado de dicha Resolución, no obstante quiero expresarte nuestra voluntad de colaboración tal y como a continuación te expongo:

1.- La Conselleria de Medio Ambiente se compromete a elaborar el proyecto de sellado y restauración del vertedero privado de Basseta Blanca, a lo largo de los primeros meses del año 1994.

2.- Hasta que la apertura del vertedero de Llombai se haga efectiva, cosa que presumiblemente ocurrirá dentro de aproximadamente ocho meses, la Conselleria de Medio Ambiente se compromete a realizar una estrecha vigilancia de los residuos que son vertidos en el vertedero de Basseta Blanca, aceptando únicamente los de procedencia urbana y tratando de que las condiciones de su depósito y tratamiento, sean dentro de lo posible las medioambientalmente más aceptables.

3.- La restauración del vertedero nos parece fundamental y absolutamente necesaria, por ello la Conselleria de Medio Ambiente está dispuesta a aportar todos los medios técnicos y personales necesarios para que ésta se ejecute con total garantía, y la obra en sí quede integrada dentro de su entorno de la mejor manera posible.

Recibe mi más cordial saludo.

[Handwritten signature]

21 DIC. 1993

VALENCIANA
DE MEDIO AMBIENT

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Región Valenciana

Data 20 DIC. 1993

EXIDA 14803

Arquitecto Alfaro, 39
Teléfono (96) 386 63 50
46011 VALENCIA
Apartat de Correus 22105

Vista la notificación de la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Riba-Roja del Turia de 20 de diciembre de 1993 por la que se declara caducada la licencia concedida en su día para la actividad de vertedero controlado de basuras con emplazamiento en la partida de Basseta Blanca y se ordena el cierre inmediato del mismo, solicitando de esta Conselleria de Medio Ambiente la redacción de un proyecto de restauración se comunica:

1.- La Conselleria de Medio Ambiente se compromete a elaborar el proyecto de sellado y restauración del vertedero en el próximo año.

2.- Ante la necesidad e importancia de la restauración, la Conselleria de Medio Ambiente aportará los medios técnicos y personales necesarios para que la restauración se ejecute y la obra en sí quede integrada dentro de su entorno con las mayores garantías.

3.- Ante la evidente problemática medioambiental que plantea el cierre inmediato ordenado, y con el fin de colaborar en una adecuada ponderación de los intereses generales afectados, que debe regir la actuación municipal de acuerdo con lo dispuesto en el art. 55 de la Ley 7/85 de bases de Régimen Local, así como a una mayor protección del medio ambiente, en el supuesto de reconsiderarse la medida adoptada, la Conselleria de Medio Ambiente se compromete a realizar una estrecha vigilancia de los residuos que se vierten en el vertedero Basseta Blanca, con el fin de que se acepten únicamente los de procedencia urbana y con la finalidad de que las condiciones de su depósito y tratamiento sean las medioambientalmente mas aceptables.

Valencia 28 de Diciembre de 1993

El Conseller de Medio Ambiente
c. la Entidad Metropolitana para el
Tratamiento de Residuos;
CERTIFICÓ que la presente copia,
debidamente cotejada, es fiel al original
que tengo ante mí

11 JUN. 2012

El Secretario,

DE LA AJUNTAMENT DE

ENTRADA

**ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT**

ASUNTO: INFORME JURÍDICO SOBRE SI LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS (EMTRE) OSTENTA LA CONDICIÓN DE 'OPERADOR RESPONSABLE' DE ACUERDO CON LA LEY DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

CMA

EXP.: 12/465

Mediante Comunicación Interna de la Subsecretaría recibida, se adjuntó la petición de informe jurídico respecto a la cuestión referida, por lo que de conformidad con las funciones de asesoramiento en derecho de la Abogacía General de la Generalitat previstas en el artículo 5 de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Asistencia Jurídica a la Generalitat, y en el Decreto 84/2006, de 16 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Abogacía General de la Generalitat, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. Antecedentes.-

Por la Dirección General de Calidad Ambiental se solicita informe jurídico sobre la consideración de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) como operador responsable, con relación al vertido de lixiviados procedentes del vertedero ubicado en el t.m. de Ribarroja, Partida Basseta Blanca.

Para la emisión del presente informe, deben tenerse en consideración los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO:

- 1) El 15 de noviembre de 1984 el Ayuntamiento de Ribarroja concede **licencia para actividad de vertedero** en la Partida Basseta Blanca al Ayuntamiento de Valencia y a FERVASA.

Se desconoce, sin embargo, pues no consta en la documentación remitida a esta Abogacía, cual ha sido la actuación de la mercantil FERVASA en la

explotación del vertedero al que nos venimos refiriendo, y si de la misma pudiera derivarse alguna responsabilidad.

Por otra parte, lo que se deduce de la documentación remitida es que el vertedero era propiedad de D. José Soriano Policarpo.

- 2) El 18 de abril de 1986 se firma un **Convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y el Ayuntamiento de Ribarroja** sobre residuos sólidos para 10 años.
- 3) Con fecha 5 de noviembre de 1986 se firma entre el Ayuntamiento de Valencia y D. José Soriano Policarpo un **contrato de servicio de explotación del vertedero controlado de residuos sólidos**, con previo acondicionamiento de los terrenos, en virtud de una adjudicación directa conforme al art.120 del Decreto 781/1986, por un plazo de 10 años.

En virtud el pliego de Prescripciones Técnicas de dicho contrato, el *contratista*, el [REDACTED], asume la responsabilidad de los residuos una vez depositados en las plataformas de vertido (Art. 5). En cuanto a los efluentes lixiviados que pudieran recogerse en las balsas dispuestas a este fin, se prevé que sean evacuados periódicamente por los Servicios del Ayuntamiento de Valencia (art.12.7). A la vez el Programa General de Explotación debe describir los canales para los efluentes lixiviados, estableciendo el Pliego que serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados del adecuado mantenimiento y explotación (art.12.10). Finalmente, el art.31 prevé que una vez agotado el vertedero se proceda al recubrimiento del mismo por cuenta del adjudicatario en la forma determinada en el pliego.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia tiene las funciones de inspección y comprobación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, velando por el adecuado mantenimiento y explotación del vertedero, de modo que quede minimizado e incluso anulado el impacto ambiental del mismo.

- 4) Con fecha 28 de julio de 1989 se firma **Convenio marco** entre el Ayuntamiento de Valencia y el Consell Metropolità de l'Horta (en adelante CMH), por el que se atribuye en el ámbito metropolitano al CMH la prestación del Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos

**ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT**

Sólidos.

- 5) En desarrollo del anterior Convenio-Marco, el 30 de abril de 1990 se firma **Convenio específico** entre Ayuntamiento de Valencia y el Consell Metropolità de l'Horta, para la transferencia a este último de los activos afectos al Servicio de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos. En concreto, en la *Clausula 4ª*, se acuerda la subrogación del CMH en todos los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato de servicio de residuos sólidos suscrito por el Ayuntamiento de Valencia con el Sr. [REDACTED] el 5 de noviembre de 1986 (contrato de servicio de explotación del vertedero controlado de residuos sólidos, con previo acondicionamiento de los terrenos). En el Anexo nº 8 del Convenio, consta comparecencia del Sr. [REDACTED] prestando su *conformidad* a la subrogación del Consell Metropolità de L'Horta en el lugar del Ayuntamiento de Valencia.
- 6) Mediante Resolución de Alcaldía de Ribarroja de 20 de diciembre de 1993, se declara **caducada la licencia** de actividad de vertedero y se ordena el cierre del vertedero.
- 7) Como consecuencia de dicha Resolución de Alcaldía, por medio de Resolución del Conseller de Medio Ambiente de 28 de diciembre de 1993, la Conselleria de Medio Ambiente se comprometió a la elaboración del proyecto de sellado y restauración del vertedero controlado de basuras en la partida Basseta Blanca, así como a aportar los medios técnicos y materiales necesarios para que la restauración se ejecute y la obra en sí quede integrada dentro de su entorno con las mayores garantías.
- 8) En 1996 **acaba** la actividad del vertedero.
- 9) Mediante la **Ley 8/1999**, de 3 de diciembre se suprimió el Consell Metropolità de l'Horta.
- 10) Mediante la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de las Áreas Metropolitanas de la C.V., se crea en su D.A. Segunda **la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE)**, a la que se encomienda en su ámbito metropolitano la prestación de los servicios de valorización y eliminación de residuos urbanos.

- 11) El 30 de marzo de 2005 se presenta **oficio del SEPRONA** derivado de la constatación de la existencia de numerosos puntos de vertido de lixiviados *"que transcurren por camino público y parcelas, filtrándose posteriormente en el suelo"* procedentes del vertedero ubicado en el t.m. de Ribarroja, Partida Basseta Blanca, así como de fuertes olores debidos a la descomposición de los residuos que, en algunos puntos, se encontraban al descubierto.
- 12) Por parte del Servicio de Inspección ambiental fueron **incoadas diligencias**, solicitando informe al Área de Residuos, pues no podía dilucidarse a quien compete la responsabilidad por los vertidos de lixiviados para poder incoar el oportuno expediente sancionador.
- 13) Tras nuevas denuncias formuladas por Agentes Medioambientales, se solicitó nuevo informe al Servicio de Gestión de Residuos, que mediante informe de fecha 13 de abril de 2012 señala que con independencia del expediente sancionador, *"ello no exime de responsabilidad a quien corresponda, titular y/o explotador, para que establezca las medidas oportunas y se haga cargo del mantenimiento, control y vigilancia de las mismas y del vertedero en su conjunto"*.
- 14) Como consecuencia de ello, el Servicio de Inspección medioambiental dirigió en fecha 11 de julio de 2012 requerimiento al EMTRE, como sucesora del CMH, para que iniciase determinadas actuaciones al respecto. La referida entidad formuló las siguientes alegaciones mediante escrito de 7 de agosto de 2012:
- Que el citado vertedero de Basseta Blanca es un vertedero privado, siendo la responsabilidad del titular (o sus herederos) por los hechos ocurridos con posterioridad al año 1996, en que se cerró el vertedero, estando, por tanto, exento de toda responsabilidad la EMTRE.
 - Que lo que se transfirió en 1990 al Consell Metropolità de L'Horta fue el Contrato de Explotación del vertedero, y no la titularidad de mismo.
 - Que la EMTRE no es "sucesora universal" del CMH, sino solo de aquellos activos para el tratamiento de residuos que le fueran transferidos, entre los que no se encontraba el Vertedero Basseta Blanca, pues nunca se ostentó la titularidad del mismo.

**ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT**

- 15) Por el Servicio de Inspección Ambiental se estima que concurre una responsabilidad medioambiental, exigible mediante el procedimiento previsto en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, contra la EMTRE como sucesor del CMH (con el que considera que existe una identidad territorial, competencial y de ente instrumental). Por ello, se solicita informe a esta Abogacia acerca de la condición de operador

SEGUNDO. Sucesión del Consell Metropolità de l'Horta por la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE). Posición jurídica respecto del vertedero de Basseta Blanca.

Como ya hemos apuntado en los antecedentes expuestos, mediante la Ley 8/1999, de 3 de diciembre SE SUPRIMIÓ el Consell Metropolità de l'Horta. Dicha Ley en su **artículo 2.1** creó la denominada *"Comisión Mixta paritaria de doce miembros de la que formarán parte por igual representantes del Gobierno Valenciano y de los municipios que integraban el Área Metropolitana de l'Horta, para llevar a cabo las transferencias de personal del Consell Metropolità de l'Horta, así como de sus medios patrimoniales, materiales y financieros"*, y en la **Disposición Transitoria** estableció que *"hasta que no se hayan creado nuevos organismos que gestionen y coordinen las competencias supramunicipales en la futura regulación de las áreas metropolitanas de la Comunidad Valenciana, el Gobierno Valenciano realizará las actuaciones necesarias para garantizar el normal funcionamiento de los servicios que correspondían al Área Metropolitana de l'Horta, cumpliendo así la cooperación y asistencia activa a las Corporaciones Locales"*.

Posteriormente, mediante la Ley 2/2001, de 11 de mayo, de creación y gestión de las Áreas Metropolitanas de la C.V., SE CREA en su D.A. Segunda la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE), *"en el área territorial integrada por los municipios"* que en la misma se identifican, reconociéndole como función específica *"la prestación de los servicios de valoración y eliminación de residuos urbanos, de acuerdo con los objetivos marcados por la Generalitat, a través de la normativa sectorial y de conformidad con los instrumentos de planificación en ella previstos"*, previendo en su **apartado 3** que *"La organización, funcionamiento y régimen económico de la entidad metropolitana son los previstos en la*

presente Ley”.

Por tanto, efectivamente con la aprobación de dicha Ley 2/2001 se produjo la SUBROGACIÓN de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) en la posición jurídica que ostentaba el Consell Metropolità de L'Horta.

En particular, en relación con el vertedero de Basseta Blanca, hemos visto también que **el Consell Metropolità de L'Horta SE SUBROGÓ en todos los derechos y obligaciones del Ayuntamiento de Valencia** derivados del Contrato de servicio de residuos sólidos suscrito por el Ayuntamiento de Valencia con el Sr. [REDACTED] el 5 de noviembre de 1986 (contrato de servicio de explotación del vertedero controlado de residuos sólidos, con previo acondicionamiento de los terrenos), en virtud del **Convenio específico** entre Ayuntamiento de Valencia y el Consell Metropolità de L'Horta de 30 de abril de 1990. Es más, en el Anexo nº 8 del Convenio, consta comparecencia del Sr. [REDACTED] prestando su *conformidad* a la subrogación del Consell Metropolità de L'Horta en el lugar del Ayuntamiento de Valencia.

Por consiguiente, con relación al citado vertedero de Basseta Blanca, vista la subrogación del Consell Metropolità de L'Horta en la posición jurídica del Ayuntamiento de Valencia (por el Convenio de 30 abril de 1990), y la posterior subrogación del EMTRE en la posición jurídica del CMH (conforme a la Ley 2/2001), aun cuando la actividad del vertedero terminó en 1996, debe entenderse que la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) ocupa la posición jurídica del Ayuntamiento de Valencia, con relación a la titularidad del servicio de recogida de residuos urbanos y al contrato de explotación firmado en su día (como Administración contratante), y en cuanto a la delimitación de su posible responsabilidad por el vertido de lixiviados, que analizaremos a continuación.

ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT

TERCERO. Régimen jurídico del Vertedero de Basseta Blanca en Ribarroja. Normativa aplicable. Régimen de responsabilidades.

NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE

Antes de entrar en el análisis de la normativa sectorial aplicable, hemos de partir de la obligación legal que tienen todos los municipios de prestar el servicio de recogida de residuos, de acuerdo con el art. 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, siendo de aplicación también el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955. Ahora bien, dicho servicio puede prestarse por cualquiera de las formas de gestión previstas en dicha Ley (art.85), debiendo tenerse en cuenta en el caso de la gestión indirecta, la normativa de contratos públicos que resulte aplicable.

En cuanto a la NORMATIVA SECTORIAL EN MATERIA DE RESIDUOS aplicable al supuesto que nos ocupa, hemos de partir de los *datos temporales* concretos de este caso; así recordemos que la licencia de actividad para vertedero fue otorgada en el año 1984, declarándose caducada en 1993, y el contrato de servicio de explotación del vertedero controlado de residuos sólidos, con previo acondicionamiento de los terrenos, fue firmado con fecha 5 de noviembre de 1986 entre el Ayuntamiento de Valencia y D. [REDACTED] [REDACTED], por un plazo de 10 años, finalizando la actividad del vertedero en 1996. Por tanto, no es aplicable en este caso la normativa actualmente vigente en materia de residuos, constituida por Ley estatal 22/2011 de residuos y suelo contaminados (ni tampoco la anterior Ley 10/1998 de Residuos que está a su vez deroga), ni en el ámbito autonómico la Ley 10/2000 de Residuos de la C.V. Igualmente, no de aplicación en el supuesto que nos ocupa, por ser este anterior en el tiempo a su entrada en vigor, el RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero (modificado posteriormente por Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio), que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, ni el RD 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. En concreto la cuestión planteada en el caso que nos ocupa, la resuelve actualmente el art. 14 del citado RD 1481/2001 (en particular en su apartado 2) que, sin embargo, entendemos que no puede

aplicarse en el presente caso por el principio de irretroactividad de las leyes.

Por ello, hemos de acudir, en principio, a la normativa vigente anterior, constituida por la **Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos** (modificada por el Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio; para adaptarla a la Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, que regula con carácter general la gestión de los residuos, tras la integración de España en las Comunidades Europeas), que fue derogada por la Disp. Derog. Única de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Dicho texto legal establecía lo siguiente:

Artículo tercero.

Uno. La eliminación de los residuos sólidos urbanos deberá llevarse a cabo evitando toda influencia perjudicial para el suelo, vegetación y fauna, la degradación del paisaje, las contaminaciones del aire y las aguas; y, en general,, todo lo que pueda atentar contra el ser humano o el medio ambiente que lo rodea.

Dos. Los productores o poseedores de residuos sólidos urbanos deberán, salvo lo dispuesto en esta ley, ponerlos, en las condiciones que determinen las Ordenanzas municipales, a disposición del **Ayuntamiento respectivo**, que **adquirirá la propiedad de los mismos desde la entrega y recogida.**

Dichas personas quedarán exentas de responsabilidad por los daños que puedan causar tales desechos o residuos, siempre que en entrega se hayan observado las citadas Ordenanzas y demás normas legales.

Tres. Los Ayuntamientos están obligados a hacerse cargo de todos los residuos sólidos urbanos que se produzcan en el territorio de su jurisdicción, con las excepciones señaladas en esta Ley.

Cuando el Ayuntamiento considere que los residuos sólidos presentan características que los hagan tóxicos y peligrosos, de acuerdo con los informes técnicos emitidas por los Organismos competentes, exigirá al productor o Poseedor de los mismos que, previamente a su recogida, realice un tratamiento para eliminar o reducir en lo posible estas características o que los deposite en forma y lugar adecuados.

Los productores o poseedores de residuos que por sus características especiales puedan producir trastornos en el transporte y tratamiento, quedan obligados a proporcionar a los Ayuntamientos información completa sobre su origen, cantidad y características.

Cuatro. Por hacerse cargo de los residuos, los Ayuntamientos percibirán las tasas que autoricen las correspondientes Ordenanzas.

Cuando se trate de desechos o residuos que por su volumen o configuración no puedan ser recogidos por los servicios normales del Ayuntamiento, podrá exigir éste su reducción o bonificación, debiendo serle abonados, en caso de no llevarlo a cabo en el grado

ABOGACÍA GENERAL DE LA GENERALITAT

preciso, los gastos suplementarios que su recogida produzca.

Cinco. En caso de que el productor o poseedor de residuos los entregue a persona física o jurídica que no posea la debida autorización, deberá responder solidariamente con ésta de cualquier perjuicio que se produzca por causa de aquéllos y de las sanciones que proceda imponer de conformidad con lo establecido en la presente ley y en la Ordenanza municipal correspondiente, en su caso.

Artículo cuarto.

Uno. El servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos podrán realizarla los Ayuntamientos a través de cualquiera de las formas de gestión previstas por la legislación de Régimen Local y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley.

Dos. Los productores o poseedores de residuos podrán conservarlos adecuadamente o constituir, individual o colectivamente, sus propios depósitos o vertederos, así como proceder a su tratamiento, previa obtención de la oportuna licencia municipal de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.

Tres. Cuando se trate de productores o poseedores de residuos sólidos industriales, de la construcción o de los comprendidos en alguno de los supuestos especiales previstos en el apartado tres del artículo tercero, los Ayuntamientos podrán imponer a aquéllos por motivos justificados la obligación de constituir depósitos o vertederos propios o proceder a su eliminación de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

Artículo quinto,

Uno. El establecimiento y formación de un depósito o vertedero controlado deberá realizarse en lugar apropiado de acuerdo con un proyecto autorizado por el Ayuntamiento cuando se trate de vertederos o depósitos particulares, o por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos u Organismo competente en el caso de Vertederos municipales.

Cuando un municipio, por no disponer de lugar adecuado dentro de su término, se vea precisado a situar un vertedero o depósito fuera del mismo, deberá obtener licencia municipal del Ayuntamiento correspondiente. A falta de acuerdo entre los municipios afectados, el Ministerio de la Gobernación podrá autorizar su instalación en el lugar que resulte más adecuado, fijando las condiciones en que deba efectuarse.

Dos. Los depósitos o vertederos tendrán la consideración de actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa, y las licencias necesarias para su instalación se tramitarán de acuerdo con lo previsto en las normas que regulan dichas actividades y con lo establecido en la presente Ley.

Tres. Cuando las características del proyecto merezcan especial atención ante la posible contaminación de recursos del subsuelo, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos solicitará informe del Instituto Geológico y Minero, en el marco de su competencia.

Si la naturaleza o ubicación del vertedero estuviera relacionada o pudiera afectar especialmente a las competencias de otros Organismos, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos podrá recabar, si lo estima conveniente, informe de los mismos.

Cuatro. Todo depósito o vertedero de residuos sólidos urbanos que no haya sido previamente autorizado será declarado clandestino e inmediatamente clausurada, impidiéndose su utilización y pudiéndose obligar al responsable a la eliminación de lo depositado y en su caso realizarlo el Ayuntamiento a cargo de aquél, todo ello sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley.

Cinco. Cuando los Ayuntamientos pretendan instalar un depósito o vertedero municipal en terrenos de propiedad particular, su elección se efectuará mediante concurso público.

Artículo sexto.

Uno. Las licencias para la formación de un depósito o vertedero, que se atenderán a lo dispuesto en la legislación de Régimen Local, podrán ser indefinidas, temporales o eventuales,

Dos. La licencia de duración indefinida se extinguirá cuando se hubiere agotado la capacidad del vertedero.

Tres. La licencia temporal se concederá por plazo determinado y podrá ser prorrogada en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.

Cuatro. La licencia eventual se concederá para hacer frente a situaciones imprevistas. Su máxima duración será de seis meses, prorrogables por otro período igual al anterior, en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen.

Cinco. Cualquiera de las licencias a que se refiere este artículo podrá ser revocada en los casos y condiciones establecidas en la legislación de Régimen Local.

RESPONSABILIDAD DE LOS SUJETOS INTERVINIENTES RESPECTO DEL VERTIDO DE LIXIVIADOS EN EL VERTEDERO BASSETA BLANCA EN RIBARROJA

En el asunto que nos ocupa, el Ayuntamiento de Valencia en el ejercicio de la competencia que le atribuye la citada Ley 42/1975 (art.3), en relación con los residuos urbanos del municipio de Valencia, decide utilizar el Vertedero de Basseta Blanca en Ribarroja, de propiedad privada. En cuanto a su responsabilidad en relación con tales residuos, en virtud de la normativa citada la propiedad de los mismos corresponde al Ayuntamiento desde el momento de su recogida, siendo además responsable del servicio, aun cuando recurra a la gestión indirecta del mismo.

Para ello, obtiene licencia para actividad de vertedero del Ayuntamiento de Ribarroja (Resolución de 15 de noviembre de 1984), tal y como le exige el art.5.1.párrafo segundo de la Ley 42/1975, licencia que fue declarada caducada

ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT

mediante Resolución de Alcaldía de 20 de diciembre de 1993. Debe advertirse que como otorgante de la referida licencia, también el Ayuntamiento de Ribarroja ostenta una responsabilidad en cuanto a la inspección y vigilancia del cumplimiento de la licencia y respecta a la comprobación de los efectos de la actividad de vertedero una vez declarada la caducidad de la licencia. De hecho el art. 12.3 de la Ley 42/1975, al regular las sanciones e infracciones, establecía:

3. El Ayuntamiento que dentro de su término municipal comprobara la existencia de residuos abandonados indebidamente, o bien que su tratamiento no se ejecuta de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, exigirá del responsable o llevará a cabo a cargo de éste, los trabajos de eliminación de dichos residuos, sin perjuicio de la indemnización que se derive de los daños ocasionados y de la sanción que proceda.

En cuanto a la explotación del vertedero, de acuerdo con el art. 4.1 de Ley citada, se firma un Contrato de explotación de fecha 5 de noviembre de 1986 con el propietario del vertedero, D. [REDACTED], para la gestión del servicio de acondicionamiento y explotación del vertedero. Dicho contrato está sujeto, por un lado, a la *Ley de contratos del Estado de 1965*, cuyo Texto Articulado fue aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril, así como a la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local (art. 85.4), y al *Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales* aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (arts.113-137), debiendo considerarse, conforme a este último, que la competencia del Servicio, aun cuando se ceda la gestión, sigue siendo siempre de la Corporación local (art. 126). Por su parte, la citada Ley de contratos del Estado establecía en su art. 72, en relación con el contrato de gestión de servicio públicos, *"El empresario estará sujeto al cumplimiento de las siguientes obligaciones con carácter general: (...) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio. Exceptúese el caso de que tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración"*.

Por otro lado, deberá también atenderse al contenido del propio contrato firmado entre el Ayuntamiento de Valencia y el Sr [REDACTED] en 1986, así como a lo dispuesto en el pliego de Prescripciones Técnicas, algunos de cuyos artículos hemos extractado en los Antecedentes de Hecho por su posible relevancia en cuanto al vertido de lixiviados producido. Conforme a dicho contrato, deberá

delimitarse la posible responsabilidad contractual tanto del Ayuntamiento de Valencia (en cuya posición jurídica se subrogaría la EMTRE, como hemos visto) como del contratista, como propietario del vertedero, atendiendo a las obligaciones de uno y otro, establecidas por la normativa aplicable y por el propio contrato.

Sin embargo, en cuanto a la **responsabilidad contractual**, tanto si deriva de la normativa aplicable como del clausulado del propio contrato, debe advertirse es exigible entre las partes contratantes *entre sí*, pero no por un tercero como sería la Generalitat. Además, a mayor abundamiento, la acción personal para exigirla, conforme al **artículo 1964 de Código Civil**, tiene el plazo de prescripción general de 15 años, que en principio, desde el cierre del vertedero en 1996 habría terminado en el año 2011. Ahora bien, el **artículo 1969 del CC** determina que *"el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse"*, por tanto, con relación al vertido de lixiviados podría quizás atenderse a la fecha en que el daño se puso de manifiesto, sin perjuicio de que si hubo incumplimiento de las obligaciones de inspección y comprobación por parte de la Administración contratante, una vez producido el cierre del vertedero, en ese caso resultaría discutible que pudiera reclamarse contra el contratista por parte de la Administración contratante una vez transcurrido el plazo de 15 años previsto legalmente.

En definitiva, debemos concluir que de acuerdo con la normativa citada y con el contenido del contrato de explotación, habría que analizar la posible RESPONSABILIDAD de cada uno de los sujetos intervinientes en este asunto:

- En primer lugar, la posible responsabilidad del **Ayuntamiento de Ribarroja**, como otorgante de la licencia de actividad de vertedero, obligado a las funciones de comprobación posteriores, de conformidad con el **art.12.3** de la citada Ley 42/1975. Sin embargo, en este caso nos encontramos también con el problema del plazo para reclamar, pues tratándose de una **responsabilidad patrimonial** el plazo para reclamarla es de UN AÑO, conforme a la Ley 30/1992, habiendo transcurrido ya dicho plazo.

ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT

- Por otro lado, en cuanto a firmantes del contrato de explotación de 1986, debe analizarse la posible responsabilidad de la **Administración contratante**, que es la *titular del servicio* en todo caso, esto es, el Ayuntamiento de Valencia (en cuya posición jurídica se subrogaría la EMTRE, como hemos visto), si bien también en este caso tendríamos como objeción la cuestión del plazo para reclamar (UN AÑO) si seguimos la vía de la posible *responsabilidad patrimonial*, sin perjuicio de lo que expondremos posteriormente en relación al concepto de daño continuado,
- En cuanto a la responsabilidad del **contratista**, el Sr. [REDACTED] como *propietario del vertedero*, aun cuando, en principio, no cabe iniciar un expediente sancionador por el vertido en sí, pues la infracción habría prescrito (considerando que el vertedero se cerró en 1996), cabría plantearse exigirle una restauración del daño medioambiental.

En este punto hemos de tener en cuenta que la obligación de reparar el daño es una obligación independiente de las infracciones que se cometen. Dicha afirmación tiene su amparo legislativo, con carácter general, en el **art. 130.2 de la Ley 30/92**, que señala "*las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determina, y quedando, de no hacerse así expedita la vía judicial correspondiente*". En consecuencia, parece claro, a tenor de lo dispuesto en este precepto, la clara distinción entre la reparación del daño y la indemnización de daños y perjuicios, con la infracción en si misma considerada, así como los plazos de prescripción diferentes que deben aplicarse.

Y en cuanto al problema de la *prescripción*, ante el silencio de la Ley la jurisprudencia en diversos pronunciamientos judiciales (como por ejemplo la STSJCV de 30 de octubre de 2008, o la reciente Sentencia del TSJ de la C.V. 4/2013, 8 de enero, dictada en el recurso de casación en interés de ley 6/2011) se ha venido considerando que la acción para la reclamar la restauración del daño causado está sujeta al plazo general de 15 AÑOS que establece el **artículo 1.964** del Código Civil para las acciones

personales que no tienen señalado término especial de prescripción, si bien para determinar si la acción ha prescrito o no debe determinarse el *dies a quo* del computo, pues podría contarse desde la clausura del vertedero o desde la puesta de manifiesto del daño producido, sin perjuicio, además, de lo que exponremos posteriormente en relación al concepto de daño continuado.

Además, en cuanto a la responsabilidad del dueño del vertedero, según la normativa de residuos aplicable al mismo, hemos de tener en cuenta que la hoy derogada Ley 42/1975, al referirse a las medidas a adoptar como consecuencia de una infracción, ya establecía lo siguiente:

En todo caso procederá la indemnización de los daños que se hubieren causado.

Por razones de urgencia y cuando concurren circunstancias que afecten a la salubridad o al orden público, podrá procederse a la clausura o suspensión por quien hubiere concedido la licencia, sin perjuicio de que se dé traslado a la autoridad competente a fin de que se inicie el oportuno expediente sancionador.

APLICABILIDAD DEL CONCEPTO DE "DAÑO CONTINUADO"

Por último, en cualquier caso, cabe plantearse si en la práctica puede entenderse que exista un "*daño continuado*", tanto a los efectos de la posible responsabilidad patrimonial del EMTRE, como de una posible infracción y/o restauración medioambiental del daño causado por parte del propietario del terreno, lo que implicaría que no aplicará el instituto jurídico de la prescripción de la acción.

Concepto jurisprudencial

En el ámbito de la JURISDICCIÓN CIVIL, se establece un criterio especial para el cómputo del plazo de prescripción del art. 1964 CC, en cuanto al *dies a quo*, cuando estamos en un supuesto de "daño continuado":

- **Sentencia de 29 octubre 2008 Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª)** RJ 2008\5801 recaída en un procedimiento en que se reclamaba por la parte actora una indemnización por gastos de descontaminación asumidos

**ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT**

por cuenta de la litigante pasiva. Como normativa, la demandante alude a la Ley de Residuos de 19 de noviembre de 1975 (RCL 1975, 2335) ; la Ley de Residuos Tóxicos y Peligrosos de 14 de mayo de 1986 (RCL 1986, 1586) , la Ley de Residuos de 21 de abril de 1998 (RCL 1998, 1028)_ , en relación con los artículos 1902 y 1908 del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual y por responsabilidad contractual al traer causa del propio causante del daño contaminante. La parte demandada se opuso entre otras razones en cuanto al fondo del asunto con la alegación de la prescripción de las acciones ejercitadas:

QUINTO

El motivo cuarto del recurso por violación del artículo 1968.2 del Código Civil (LEG 1889, 27) , debido a que censura la inexistencia de daños continuados, y, por tanto, la prescripción de la acción ejercitada en el escrito de demanda, porque la actividad de producción de fertilizantes de la recurrente finalizó en el año 1989, de modo que considera imposible que se siguieran "causando" daños, que además es cuestión diferente de la permanencia de sus efectos al tiempo en que se entera la actora.

El motivo se desestima.

Para el cómputo del plazo de prescripción es preciso conocer cual es el comienzo de éste, que conlleva la posibilidad del ejercicio de la acción; la doctrina jurisprudencial ha entendido que no hay tal posibilidad cuando el hecho determinante se oculta o se desconoce, en cuyos casos comienza el cómputo de la prescripción cuando se tuvo conocimiento del acto perjudicial o del daño objeto de reclamación.

La jurisprudencia ha declarado que, como ha señalado la STS de 21 de marzo de 2005 (RJ 2005, 3878) , el artículo 1968.2 del Código Civil sustituyó, conforme a un criterio subjetivo, la referencia a la posibilidad abstracta de ejercicio contenida en el artículo 1969, por una posibilidad en concreto, al señalar como día inicial de la prescripción de las acciones pare exigir responsabilidad por las obligaciones derivadas de culpa o negligencia, de que se trata en el artículo 1902, aquel "en que lo supo el agraviado" (STS de 13 de febrero de 2007 [RJ 2007, 4612]).

Obra declarado en autos que el primer conocimiento de la contaminación del terreno adquirido por la actora lo tiene por la comunicación de la Junta de Compensación en marzo de 1999, y, en consecuencia, ha ejercitado su acción dentro del plazo legal.

- Sentencia núm. 31/2004 de 28 enero Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) RJ 2004\153

F.J.4º (...) El dies a quo, conforme al artículo 1969, es el de actio nata y ésta no es viable hasta que se conocen los daños y en los que son continuados, no se computa desde la producción de cada uno de ellos. Las sentencias citadas anteriormente, que se refieren a este mismo tema, de 24 de mayo de 1993 (RJ 1993, 3727) y 7 de abril de 1997 (RJ 1997, 2743) dicen: «Es consolidada doctrina de esta Sala (Sentencias de 12 de diciembre de 1980 [RJ 1980, 4747] , 12 de febrero de 1981 [RJ 1981, 530] , 19 de septiembre de 1986 [RJ 1986, 4777] , 25 de junio de 1990 [RJ 1990, 4889] , 15 [RJ 1993, 2284] y 20 de marzo y 24 de mayo de 1993 [RJ 1993, 3727]_ , entre otras) la de que cuando se trata de daños continuados o de producción sucesiva e ininterrumpida, el cómputo del plazo de prescripción de la acción no se inicia ("dies a quo") hasta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida, como ocurre en el presente supuesto litigioso, en el que los daños en las respectivas fincas de los actores se han venido produciendo sucesiva e ininterrumpidamente desde el año... hasta la fecha de interposición de la demanda iniciadora del proceso al que este recurso se refiere».

También en el ÁMBITO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en relación con la responsabilidad patrimonial de la AP, se establece el mismo criterio en cuanto al cómputo del plazo para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración:

- Sentencia de 8 octubre 2012 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) RJ 2012\9630

Son muchas las sentencias de esta Sala y Sección que tratan la cuestión del cómputo del plazo de un año para el ejercicio de la acción para reclamar. Una de las más recientes la encontramos en la de 18 de Julio de este mismo año (RJ 2012, 7917), recurso de casación 2244/2011, donde se recoge transcrita la Jurisprudencia que ha ido perfilando la distinción de *daños permanentes y daños continuados*:

"En la Sentencia de 11 de mayo de 2004 (RJ 2004, 4053), recurso de casación 2191/2000 se recordaba una línea jurisprudencial con mención de las Sentencias de 17 de febrero de 1997 , 26 de marzo de 1999 (RJ 1999, 3164) , 29 de junio del 2002 (RJ 2002, 8799) y 10 de octubre del 2002 (RJ 2002, 9805) en el sentido de que

**ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT**

"por daños permanentes debe entenderse aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo. Ejemplo de un daño de este tipo, cuyo resultado lesivo queda determinado por la producción del hecho o acto causante, sería el de la pérdida de un brazo, o de una pierna. Se trata de daños que pueden ser evaluados económicamente desde el momento de su producción, y por eso el día inicial del cómputo es el siguiente a aquél en que el daño se produjo. Daños continuados, en cambio, son aquellos que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. Y por eso, para este tipo de daños, el plazo para reclamar no empezará a contarse sino desde el día en que cesan los efectos. O, como dice el artículo 145.2 de la Ley 30/1992, para los daños físicos o psíquicos inferidos a las personas físicas, "desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas". Línea seguida posteriormente, en las Sentencias de 14 de julio de 2010, recurso de casación 5990/2008, 22 de febrero de 2012, recurso de casación 2008/2011."

- **Sentencia de 24 abril 2012 Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) RJ 2012\6227** referida a un supuesto de responsabilidad sanitaria, donde el concepto de daño continuado se vincula a la cuestión de las 'secuelas':

TERCERO

Disconforme con la sentencia impugnada, la parte recurrente sustenta un único motivo de impugnación al amparo del artículo 88.1.d) LRJCA, que divide en cuatro argumentaciones diferentes, si bien referidas todas ellas al cómputo del plazo de un año que señala la normativa aplicable. El referido motivo lo fundamenta en la infracción del artículo 142.5 de la Ley 30/92 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) y el artículo 4.2 del Reglamento de 26 de marzo de 1993, infracción que razona en cuatro apartados diferentes, si bien todos ellos tendentes a criticar la argumentación de la sentencia en cuanto al cómputo del plazo de prescripción. En síntesis se refiere a que la sentencia no resuelve el fondo del asunto al apreciar la prescripción; confunde un portador asintomático con quien ha desarrollado, por el contrario, la enfermedad; considera dicha sentencia que el diagnóstico estaba asentado; e infringe la jurisprudencia sobre contagio de Hepatitis C.

Respecto del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad y su cómputo hemos señalado en nuestra reciente **sentencia de fecha 29 de noviembre de 2011** (RJ 2012, 2529) , recurso 4647/2009 , lo siguiente:

<<En efecto, con respecto a un padecimiento similar, pusimos de manifiesto en nuestra sentencia de dieciocho de enero de dos mil ocho, rec.4224/2002 (RJ 2008, 166) , que es necesario partir de la consideración de que la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración debe ejercitarse, por exigencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 142 y 4.2, respectivamente, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) y del Reglamento aprobado por Real Decreto 429/1.993 (RCL 1993, 1394 y 1765) , en el plazo de un año computado a partir de que se produzca el hecho o acto lesivo que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Ello es una consecuencia de la adaptación de la regla general de prescripción de la acción de responsabilidad del artículo 1.902 del Código Civil (LEG 1889, 27) que ha de computarse, conforme al principio de la "actio nata" recogido en el artículo 1.969 de dicho texto legal , desde el momento en que la acción pudo efectivamente ejercitarse.

En el caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el número 5 del artículo 142 de dicha Ley y el 4.2 del citado Decreto , exigen que la reclamación se ejercite dentro del plazo de un año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas; y es el primero de los preceptos citados el considerado infringido por la recurrente, con apoyo en una conocida jurisprudencia de esta Sala, que parte de la distinción entre los daños permanentes y los daños continuados.

Y es que existen determinadas enfermedades en las que no es posible una curación propiamente dicha, pues la salud queda quebrantada de forma irreversible, supuestos en que entra en juego la previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de efectuarse, siguiendo el principio de la actio nata, desde la determinación del alcance de las secuelas, aún cuando en el momento de su ejercicio no se haya recuperado íntegramente la salud, por cuanto que el daño producido resulta previsible en su evolución y en su determinación, y por tanto, cuantificable.

También es evidente que surgen casos en la realidad sanitaria en que ni existe auténtica curación ni la posibilidad de determinación del alcance de las secuelas; y ello bien porque la propia naturaleza de la enfermedad no permita prever la posible evolución de las mismas, bien porque en el devenir de su desarrollo se produzcan secuelas imprevistas y no determinadas, en cuyos supuestos este Tribunal ha venido aceptando la posibilidad de la existencia de una temporánea reclamación a

**ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT**

pesar de haberse producido la misma fuera del periodo del año desde que inicialmente se produjo el diagnóstico en atención a esa imposibilidad de determinación concreta en toda su extensión del daño sufrido. Es el supuesto de enfermedades de evolución imprevisible como son las derivadas del contagio de la hepatitis C o del SIDA o aquellos otros ocasionales casos en que la enfermedad inicialmente diagnosticada se traduce en unas secuelas de imposible predeterminación en su origen. En estos últimos casos ha afirmado, efectivamente, esta Sala que si del hecho originador de la responsabilidad se infieren perjuicios o daños que no pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, el plazo de prescripción no comienza a computarse sino a partir del momento en que dicha determinación es posible, aceptando igualmente que en aquellas enfermedades excepcionales de imprevisible evolución, el daño pueda ser reclamado, como continuado, en cualquier momento. Así lo hemos afirmado en sentencia del 31 de octubre de 2.000 (RJ 2000, 2529) . A tal efecto y como señala la sentencia de 25 de junio de 2002 (RJ 2002, 5755) , esta Sala viene "proclamando hasta la saciedad (sentencias de 8 de julio de 1993 (RJ 1993, 5466) , 28 de abril de 1997 , 14 de febrero y 26 de mayo de 1994 (RJ 1994, 4280) , 26 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9378) y 11 de mayo de 2001 (RJ 2001, 7418)), que «el "dies a quo" para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto» (Sentencia de 31 de octubre de 2000 (RJ 2000, 9384)), o, en otros términos «aquel en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de las secuelas, siendo de rechazar con acierto la prescripción, cuando se pretende basar el plazo anual en la fecha del diagnóstico de la enfermedad» (Sentencia de 23 de julio de 1997)">.

Y también hemos señalado en nuestra sentencia de fecha 31 de mayo de 2011 (RJ 2011, 4848) , recurso 7011/2009 , lo siguiente:

<<Lo que tampoco supone que el plazo quede abierto de manera indefinida, sino que ha de estarse al momento en el que se concreta el alcance de las secuelas, pues el carácter crónico o continuado de la enfermedad no impide conocer en un determinado momento de su evolución su alcance y secuelas definitivas o al menos de aquellas cuya concreta reparación se pretende (Sentencias de 12 de diciembre de 2009 , 15 de diciembre de 2010 (RJ 2010, 9088) y 26 de enero de 2011 - recursos 3425/2005 , 6323/2008 y 2799/2009) , ni siquiera al albur que la situación ya determinada fuera sobrevenidamente reconocida a efectos laborales y de Seguridad Social, lo que constituye una mera paradoja de la tramitación coetánea de los distintos procedimientos administrativos y sociales consecuencia de un mismo

resultado lesivo, insusceptible de reabrir la reclamación por la secuela definitivamente determinada en el momento anterior>>>.

- **Sentencia de 19 abril 2000 Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo) RJCA 2000\2160**

SEGUNDO

El artículo 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 marzo (RCL 1993, 1394 y 1765), que aprueba el Reglamento de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial y el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , establecen que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo comenzará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Con anterioridad a la vigencia de la expresada normativa era de aplicación el artículo 40.3 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, Texto Refundido, aprobado por Decreto 16 julio 1957 (RCL 1957, 1058, 1178 y NDL 25852) , que señalaba que «el derecho a reclamar caducará al año del hecho que motive la indemnización».

No habiendo sufrido modificación el plazo de un año concedido al perjudicado para reclamar los daños sufridos por el normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos, el siguiente problema que se plantea es el de su cómputo, en concreto la determinación del día inicial o «dies a quo» para apreciar si concurre la prescripción de la acción opuesta.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene reiterando que el día inicial no será aquel en que se produce el daño, sino también aquel en que termina de manifestarse el efecto lesivo, o se alcanza la curación o la determinación de las secuelas físicas, con lo que el perjudicado adquiere cabal y perfecto conocimiento de la trascendencia y del mal que padece (Sentencias de 5 junio 1991, 10 mayo 1993 [RJ 1993, 6375] y 30 abril 1996 [RJ 1996, 3644]).

Asimismo, el Tribunal Supremo ha establecido el distingo entre daños continuados y daños permanentes, como pone de manifiesto la Sentencia de 22 junio 1995 (RJ 1995, 4780) , denominando daños permanentes a los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto, aun cuando sea inalterable y permanente

ABOGACÍA GENERAL DE LA GENERALITAT

en el tiempo el resultado lesivo, en tanto que los segundos son aquellos que en base a una unidad de acto se producen día a día de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad. En el caso de los daños definidos como permanentes, es evidente que producido el acto causante del resultado lesivo éste queda perfectamente determinado y puede ser evaluado o cuantificado de forma definitiva.

Por el contrario, en el supuesto de daños continuados, al producirse éstos día a día en el tiempo, produciéndose un agravamiento paulatino sin solución de continuidad, como consecuencia de un único hecho inicial, con lo que el resultado lesivo no puede ser evaluado de manera definitiva hasta que no cesa el hecho causante de los mismos, lo que ha llevado a la jurisprudencia a señalar que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad patrimonial no empieza a computarse hasta que no cesan los efectos lesivos, por contraposición a lo que ocurre en los daños permanentes en que el plazo comienza a computarse en el momento en que se produce la conducta dañosa.

Por último, debemos señalar que la aplicabilidad del concepto de 'daño continuado' al supuesto que nos ocupa, va a depender del análisis de los daños producidos desde un punto de vista técnico, pues desconocemos si el vertido de lixiviados sigue produciendo nuevos daños actualmente o cuando se pusieron de manifiesto los daños existentes, o si cabe la posibilidad de que se agraven.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

Sin perjuicio de lo expuesto, en el marco de la normativa actual tanto de residuos como de responsabilidad medioambiental, cabría plantearse además las siguientes alternativas para exigir la responsabilidad de los sujetos afectados por la actividad del vertedero de Basseta Blanca:

- a) RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL, a la que específicamente se refiere la consulta, en conexión con la normativa de residuos actual, Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados en relación con la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental, cuestión esta a la que nos referiremos en el epígrafe siguiente;
- b) La posibilidad de declarar los terrenos afectados por el vertido de lixiviados, como consecuencia de la explotación del vertedero a que nos venimos refiriendo, como SUELO CONTAMINADO, de conformidad

con lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en los arts. 64 y siguientes de la Ley 10/2000 de Residuos de la C.V., posibilidad que analizaremos en el apartado quinto de nuestro informe.

CUARTO. La figura del operador responsable en la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Aplicabilidad al EMTRE en el caso que nos ocupa.

En la consulta que se formula a esta Abogacía, se pregunta acerca de si la E.M.T.R.E. puede tener la condición de *operador responsable* en la responsabilidad medioambiental que pueda derivarse de la gestión del vertedero de titularidad privada de la Basseta Blanca en Ribarroja.

En el ámbito de la gestión de residuos, la vigente normativa sectorial aplicable, la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, contempla expresamente la aplicabilidad de la responsabilidad medioambiental regulada por la Ley 26/2007, en el artículo 54 de la Ley 22/2011:

Artículo 54. Reparación del daño e indemnización.

1. Sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el infractor quedará obligado a la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como a la indemnización de los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine.

2. En los casos de daños medioambientales, el infractor estará obligado a la reparación en los términos de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. La metodología de reparación prevista en esta Ley 26/2007, de 23 de octubre, podrá aplicarse también en los demás supuestos de reparación de daños en los términos previstos en su disposición adicional novena.

De acuerdo con dicho precepto, cabría exigir la restauración medioambiental por los daños causados por una conducta infractora del gestor de residuos (Administración contratante o contratista, según cual fuera la conducta infractora), con carácter general, siendo aplicable lo ya expuesto en

**ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT**

cuanto a la prescripción de la acción para exigirlo, y lo expresado en cuanto al 'daño continuado'. Pero además, la Ley se remite específicamente a la Ley 26/2007 cuando se trate de daños ambientales.

Sin embargo, en cualquiera de los dos supuestos, el problema lo encontramos en que la referida Ley 22/2011 no es aplicable al caso que nos ocupa, por el principio de irretroactividad de las leyes, sino que la normativa aplicable es la citada a lo largo de nuestro informe.

En cuanto a la APLICABILIDAD de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental al caso que nos ocupa, hemos de partir de cuál es el objeto de la misma y los supuestos incluidos en el ámbito del 'daño ambiental'. Así, dicha Ley tiene por objeto, precisamente, regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que *quien contamina paga* (art.1). A estos efectos, la propia Ley, al definir el "*daño medioambiental*", en su art.2, incluye *'los daños al suelo, es decir, cualquier contaminación del suelo que suponga un riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente debidos al depósito, vertido o introducción directos o indirectos de sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo o en el subsuelo.*

Por otro lado, será necesario para que un daño ambiental entre dentro del ámbito de aplicación de la Ley que el mismo haya sido causado por alguna de las actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo, culpa o negligencia. En dicho anexo se incluye expresamente:

2. Las **actividades de gestión de residuos**, como la recogida, el transporte, la recuperación y la eliminación de residuos y de residuos peligrosos, así como la supervisión de tales actividades, que estén sujetas a permiso o registro de conformidad con la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Estas actividades incluyen, entre otras cosas, la explotación de vertederos y la gestión posterior a su cierre de conformidad con el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre (RCL 2002, 280), por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la explotación de instalaciones de incineración, según establece el Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.

Por tanto, de acuerdo con el *ámbito material* de aplicación de la Ley 26/2007, el vertido de lixiviados producido en el vertedero Basseta Blanca encajaría en el concepto de daño medioambiental que conforme a la Ley da lugar a responsabilidad medioambiental.

Por otro lado, también se cumple en este caso el *ámbito temporal* de la responsabilidad medioambiental, que el art. 4 de la Ley fija en 30 años desde que tuvo lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó, estableciendo que dicho plazo se computará desde el día en el que haya terminado por completo o se haya producido por última vez la emisión, el suceso o el incidente causante del daño.

Sin embargo, el problema lo encontramos en la propia VIGENCIA DE LA LEY 26/2007 en relación al caso que nos ocupa, pues la misma se declara expresamente no aplicable a los daños anteriores a su entrada en vigor. En concreto la Disposición Transitoria Única 'Daños anteriores a la entrada en vigor de la Ley' establece:

1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes daños:

- a. Los causados por una emisión, un suceso o un incidente producido antes del 30 de abril de 2007.
- b. Los causados por una emisión, un suceso o un incidente que se haya producido después del 30 de abril de 2007, cuando éstos se deriven de una actividad específica realizada y concluida antes de dicha fecha.

2. La irretroactividad de esta Ley en los términos descritos en el apartado anterior no impedirá que se adopte cualquiera de las siguientes medidas:

- a. Que se exija responsabilidad conforme a otras normas que resulten de aplicación.
- b. Que se impongan medidas de prevención o de evitación de nuevos daños conforme a lo dispuesto en la misma.
- c. Que se obligue a la reparación respecto a la parte de los daños no excluidos en el apartado 1.

En este caso, tanto si tomamos como referencia la fecha de cierre del vertedero (1996), como la manifestación de los daños (considerando incluso la fecha del oficio del SEPRONA en 2005), estaríamos ante un daño causado por una emisión, un suceso o un incidente producido antes del 30 de abril de 2007.

ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT

al cual no le es de aplicación la Ley 26/2007. No obstante, la Ley aclara que ello no impedirá que se exija responsabilidad conforme a otras normas que resulten de aplicación o que se impongan medidas de prevención o de evitación de nuevos daños conforme a lo dispuesto en la misma. Por tanto, aun cuando no pueda exigirse la responsabilidad medioambiental de la Ley 26/2007, ello no obsta para que sea exigible la restitución del daño causado en el ámbito medioambiental, conforme a la normativa general y a la normativa sectorial aplicable que hemos citado.

En cuanto a la interpretación de la cláusula de derecho transitorio de la Ley 26/2007, ha sido aclarada por la **Sentencia de 9 marzo 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) 2010\69 Caso ERG y otros, sobre la aplicabilidad *ratione temporis* de la Directiva 2004/35**

30. El Gobierno italiano y la Comisión dudan de que la Directiva 2004/35 (LCEur 2004, 1844) pueda aplicarse *ratione temporis* a los hechos del litigio principal, en la medida en que el daño medioambiental es anterior al 30 de abril de 2007 y/o resulta, en cualquier caso, de actividades anteriores a las que se puso fin antes de dicha fecha. La Comisión, sin embargo, sugiere que la citada Directiva podría aplicarse en lo relativo a los daños posteriores al 30 de abril de 2007 derivados de la actividad actual de los operadores interesados. No obstante, opina que no es aplicable a una contaminación anterior a esa misma fecha causada por operadores distintos de los que operan actualmente en la Rada de Augusta y que se pretende imputar a estos últimos.

31. A este respecto, como se desprende del trigésimo considerando de la Directiva 2004/35 (LCEur 2004, 1844) , el legislador de la Unión ha considerado, en relación con las disposiciones relativas al régimen de responsabilidad medioambiental instaurado por la referida Directiva, que «los daños causados antes de la expiración del plazo de transposición» de la Directiva, es decir, anteriores al 30 de abril de 2007, «no deben estar cubiertos por sus disposiciones».

32. El referido legislador indicó expresamente en el artículo 17 de la Directiva 2004/35 (LCEur 2004, 1844) , las situaciones en las que ésta no se aplica. Habida cuenta de que se han definido así de manera negativa las situaciones que no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación *ratione temporis* de dicha Directiva, ha de deducirse de ello que, desde el punto de vista temporal, cualquier otra situación está comprendida, en principio, en el régimen de responsabilidad medioambiental establecido por la referida Directiva.

33. Del artículo 17, primer y segundo guión, de la Directiva 2004/35 (LCEur 2004, 1844) se desprende que ésta no se aplica a los daños causados por una emisión, suceso o incidente que se hayan producido antes del 30 de abril de 2007 ni a los que se hayan producido después de dicha fecha cuando se deriven de una actividad específica realizada y concluida antes de la misma.

34. Ha de deducirse de ello que la citada Directiva se aplicará a los daños causados por una emisión, suceso o incidente que se hayan producido después del 30 de abril de 2007 cuando los referidos daños se deriven de actividades realizadas con posterioridad a dicha fecha o anteriormente pero que no hubiera concluido antes de la misma.

35. En virtud del artículo 267 TFUE (RCL 2009, 2300), basado en una clara separación de las funciones del órgano jurisdiccional nacional y del Tribunal de Justicia, éste sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una norma del Derecho de la Unión a partir de los hechos que le indique el órgano jurisdiccional nacional. De lo anterior se desprende que no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento regulado en dicho artículo, sino al órgano jurisdiccional nacional aplicar a medidas o a situaciones nacionales las normas del Derecho de la Unión cuya interpretación ha facilitado el Tribunal de Justicia (véase la sentencia de 11 de septiembre de 2008 [TJCE 2008, 203] , CEPSA, C-279/06, Rec. p. I-6681, apartado 28).

36. Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, sobre la base de los hechos que sólo a él compete apreciar, si en los litigios principales los daños a los que se refieren las medidas reparadoras del medio ambiente adoptadas por las autoridades nacionales competentes están comprendidos dentro de una de las situaciones contempladas en el apartado 34 de la presente sentencia.

37. Si dicho órgano jurisdiccional concluyera que la Directiva 2004/35 (LCEur. 2004, 1844) no es aplicable a los asuntos de que conoce, tal situación estaría incluida en el ámbito de aplicación del Derecho nacional dentro del respeto de las reglas del Tratado y sin perjuicio de otros actos de Derecho derivado.

En cuanto a la cuestión concreta de si la EMTRE puede ser considerado operador responsable, se trata de una cuestión irrelevante si partimos que la Ley 26/2007 no es de aplicación al supuesto que analizamos, no obstante lo cual abordaremos dicha condición de 'operador responsable' del EMTRE atendiendo a los criterios que establece la Ley en sus arts.2.10, 9 y 14:

Artículo 2.10. Operador: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe una actividad económica o profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la legislación sectorial, estatal o autonómica, disponga para cada actividad sobre los titulares de permisos o autorizaciones, inscripciones registrales o comunicaciones a la Administración.

De acuerdo con este precepto, en el caso que nos ocupa parece que pueden considerarse 'operadores' a priori, tanto la Administración contratante, que es la *titular del servicio* en todo caso, esto es, el Ayuntamiento de Valencia (en cuya posición jurídica se subrogaría la EMTRE, como hemos visto), como el

ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT

contratista, el [REDACTED] como propietario del vertedero.

Sin embargo, en cuanto a la condición de operador responsable del EMTRE (por subrogación en la posición jurídica del Ayuntamiento de Valencia), el art.9.4 de la Ley 26/2007 establece, al hablar de la 'responsabilidad de los operadores' lo siguiente:

9.4. La Administración pública que hubiera adjudicado un contrato o autorizado una actividad cuyo desarrollo diese lugar a daños medioambientales, o a la amenaza de los mismos, colaborará con la autoridad competente, sin que se derive responsabilidad medioambiental de la Administración pública por las actuaciones del operador, salvo en el supuesto previsto en el artículo 14.1.b.

Dicho artículo 14.1.b. establece:

Artículo 14. Inexigibilidad de la obligación de sufragar los costes.

1. El operador no estará obligado a sufragar los costes imputables a las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños cuando demuestre que los daños medioambientales o la amenaza inminente de tales daños se produjeron exclusivamente por cualquiera de las siguientes causas:

(...) b) El cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una autoridad pública competente, incluyendo las órdenes dadas en ejecución de un contrato a que se refiere la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.

Se exceptúan los supuestos en los que la orden o la instrucción se hayan dictado para hacer frente a una emisión o a un incidente previamente generado por la propia actividad del operador.

La aprobación de proyectos por las Administraciones públicas, cuando así lo exija la normativa aplicable, no tendrá la consideración de orden o instrucción, a los efectos de lo previsto en este apartado. En particular, los proyectos aprobados por la administración contratante no podrán considerarse como orden o instrucción obligatoria a los efectos de este apartado respecto de daños medioambientales no previstos expresamente en la declaración de impacto ambiental o instrumento equivalente.

Cuando los daños medioambientales sean consecuencia de vicios en un proyecto elaborado por la Administración en un contrato de obras o de suministro de fabricación, el operador no vendrá obligado a sufragar el coste de las medidas que se adopten.

Por tanto, la Administración contratante (Ayuntamiento de Valencia, y en su lugar el EMTRE) solo tendría la responsabilidad medioambiental como operador o por las operaciones del operador, cuando los daños se hayan producido en el marco del contrato de explotación como consecuencia de una *orden* dada en ejecución del contrato, lo que no nos consta de la documentación remitida. Por consiguiente, aun en el hipotético caso de que fuera aplicable al presente supuesto la Ley 26/2007 (que no lo es), no podríamos actuar contra el EMTRE como operador responsable, pues no tendría en principio en este caso tal condición, a diferencia del dueño del vertedero que, cabe entender, que sí sería operador responsable en los términos de la Ley 26/2007.

No obstante lo expuesto, la Ley dispone en su *Disposición Adicional Segunda, apartado 3*, que la aplicación de dicha Ley no impide la atribución de responsabilidades a sujetos distintos de los operadores, por aplicación de otras normas medioambientales.

QUINTO. Posibilidad de declarar los terrenos afectados por el vertedero de Basseta Blanca como suelo contaminado.

Por último, como alternativa a la exigencia de restauración del daño causado al dueño del vertedero, en el marco de la *Ley 22/2011*, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y de los arts. 64 y siguientes de la *Ley 10/2000* de Residuos de la C.V., cabría plantearse si se dan técnicamente las circunstancias para declarar los terrenos afectados por el vertido de lixiviados como *suelo contaminado*, en cuyo caso serán de aplicación los siguientes preceptos de la citada Ley, que reproducimos a continuación:

Artículo 34. Declaración de suelos contaminados.

1. Las Comunidades Autónomas declararán y delimitarán los suelos contaminados, debido a la presencia de componentes de carácter peligroso procedentes de las actividades humanas, evaluando los riesgos para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que, establecidos en función de la naturaleza de los suelos y de sus usos, se determinen por el Gobierno previa consulta a las Comunidades Autónomas.

ABOGACÍA GENERAL DE LA GENERALITAT

2. La declaración de suelo contaminado incluirá, al menos, la información contenida en el apartado 1 del anexo XI.

3. La declaración de un suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas Comunidades Autónomas y será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad, a iniciativa de la respectiva Comunidad Autónoma en los términos que reglamentariamente determine el Gobierno. Esta nota marginal se cancelará cuando la Comunidad Autónoma correspondiente declare que el suelo ha dejado de tener tal consideración.

4. La declaración de un suelo como contaminado puede comportar la suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación y otros aprovechamientos del suelo en el caso de resultar incompatibles con las medidas de limpieza y recuperación del terreno que se establezcan, hasta que éstas se lleven a cabo o se declare el suelo como no contaminado.

Artículo 33. Actividades potencialmente contaminantes.

1. El Gobierno aprobará y publicará una lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos.

2. Los titulares de estas actividades deberán remitir periódicamente a la Comunidad Autónoma correspondiente los informes en los que figuren la información que pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.

Los propietarios de las fincas en las que se haya realizado alguna de las actividades potencialmente contaminantes estarán obligados, con motivo de su transmisión, a declararlo en escritura pública. Este hecho será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad.

Artículo 36. Sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de suelos contaminados.

1. Estarán obligados a realizar las operaciones de descontaminación y recuperación reguladas en el artículo anterior, previo requerimiento de las Comunidades Autónomas, los causantes de la contaminación, que cuando sean varios responderán de estas obligaciones de forma solidaria y, subsidiariamente, por este orden, los propietarios de los suelos contaminados y los poseedores de los mismos.

En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión, responderán subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, el poseedor y el propietario.

Las obligaciones previstas en este apartado se entienden sin perjuicio de lo establecido en los artículos 54 y 55.

2. Los responsables subsidiarios podrán repercutir el coste de las actuaciones que hubieran llevado a cabo en la recuperación de un suelo declarado contaminado, al causante o causantes de la contaminación.

La recuperación de los costes de descontaminación no podrá exigirse por encima de los niveles de contaminación asociados al uso del suelo en el momento en el que se produjo la

contaminación por el causante.

3. Serán responsables solidarios o subsidiarios, de las obligaciones pecuniarias que resulten de esta Ley, los sujetos que se recogen en el artículo 13 de la Ley 26/2007, de 24 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en los términos que dicho artículo establece.

4. Si las operaciones de descontaminación y recuperación de suelos contaminados fueran a realizarse con financiación pública, sólo se podrán recibir ayudas previo compromiso de que las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la cuantía subvencionada en favor de la Administración pública que haya financiado las citadas ayudas.

Por último, la Ley contempla en el **artículo 38** lo que denomina la 'recuperación voluntaria de suelos' en los siguientes términos:

La descontaminación del suelo para cualquier uso previsto de este podrá llevarse a cabo, sin la previa declaración del suelo como contaminado, mediante un proyecto de recuperación voluntaria aprobado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Tras la ejecución del proyecto se acreditará que la descontaminación se ha llevado a cabo en los términos previstos en el proyecto. La administración competente llevará un registro administrativo de las descontaminaciones que se produzcan por vía voluntaria.

Igualmente, deben considerarse los arts. 64 y siguientes de la Ley 10/2000 de Residuos de la C.V., en cuanto no contradigan los preceptos básicos de la Ley estatal. De hecho, ya existe algún precedente en la Comunidad Valenciana de declaración de un suelo contaminado (Decreto 92/2008, de 27 de junio por el cual se declara contaminado el suelo correspondiente al emplazamiento donde se halla situada la estación de servicio Petrocu, en la av. Luis Suñer, nº 5, de Alzira, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de fecha 1 de julio de 2008 (DOCV número 5796)

SEXTO. Posible actuación de oficio de la propia Generalitat.

Cabe plantearse, finalmente, si la propia Generalitat, en concreto la Conselleria con competencias en materia de medio ambiente, esto es la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en el ejercicio de sus funciones en materia de protección del medioambiente, podría estar obligada a exigir o incluso participar en la restauración del daño

**ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT**

medioambiental causado en el supuesto que nos ocupa.

Entendemos que, en principio, no existe una obligación legal expresa de asumir la responsabilidad del daño medioambiental que analizamos, sin perjuicio de que pueda valorarse si se han cumplido adecuadamente las funciones de vigilancia, inspección y control. Por otra parte, cabe señalar que la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, regula en su art. 23 la '*Actuación directa de la Administración*', pero como ya hemos expuesto, dicho texto legal no es aplicable al presente caso.

Finalmente, debemos traer a colación también que en el año 1993, a raíz de la Resolución de Alcaldía de Ribarroja de 20 de diciembre de 1993 que declaró caducada la licencia de actividad de vertedero y ordenó el cierre del vertedero, el Conseller de Medio Ambiente dictó Resolución de 28 de diciembre de 1993, por la que la Conselleria de Medio Ambiente se comprometió a la elaboración del proyecto de sellado y restauración del vertedero controlado de basuras en la partida Basseta Blanca, así como a aportar los medios técnicos y materiales necesarios para que la restauración se ejecute y la obra en sí quede integrada dentro de su entorno con las mayores garantías. Sin embargo, a nuestro entender, dicha Resolución responde a un compromiso de carácter político, más que a una obligación legal.

SÉPTIMO: Conclusiones.

De conformidad con los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, cabe exponer las siguientes CONCLUSIONES:

- 1) El Vertedero Basseta Blanca en el t.m. de Ribarroja constituye un vertedero de propiedad privada, que fue utilizado por el Ayuntamiento de Valencia durante el periodo 1986-1996 para la gestión de los residuos urbanos de los que era competente dicho Ayuntamiento. Para ello, el referido Ayuntamiento firmó un contrato de explotación con el dueño del vertedero, el Sr. Soriano Policarpo el 5 de noviembre de 1986 (contrato de servicio de explotación del vertedero controlado de residuos sólidos, con previo acondicionamiento de los terrenos).

- 2) Visto que el Consell Metropolità de L'Horta se subrogó en todos los derechos y obligaciones del Ayuntamiento de Valencia (por el Convenio de 30 abril de 1990), y vista la posterior subrogación del EMTRE en la posición jurídica del Consell Metropolità de L'Horta (conforme a la Ley 2/2001), debe entenderse que la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) ocupa la posición jurídica del Ayuntamiento de Valencia, con relación a la titularidad del servicio de recogida de residuos urbanos y al contrato de explotación firmado en su día (como Administración contratante) con el Sr. [REDACTED].
- 3) En cuanto a la posible responsabilidad de los sujetos intervinientes en la actividad del vertedero, hasta su cierre en 1996, a raíz del vertido de lixiviados denunciado en 2005, cabría analizar si es posible exigir una responsabilidad patrimonial a la Administración titular del servicio (Ayuntamiento de Valencia, y en su lugar al EMTRE), y la ^{reparación} restitución del daño causado al propietario del vertedero. En ambos casos, sin embargo, la acción para reclamar (un año en el primer caso y 15 años en el segundo) estaría prescrita, salvo que estemos en un supuesto de 'daño continuado', tal y como lo concibe la jurisprudencia, lo que debe determinarse desde el punto de vista técnico.
- 4) En cuanto a la pregunta objeto de la consulta de si puede exigirse la responsabilidad medioambiental de la Ley 26/2007 al EMTRE como "operador responsable", hemos de concluir que la referida Ley no es aplicable al supuesto que nos ocupa de conformidad con la Disposición Transitoria Única, pues estamos ante un daño causado por una emisión; un suceso o un incidente producido antes del 30 de abril de 2007. No obstante, la Ley aclara que ello no impedirá que se exija responsabilidad conforme a otras normas que resulten de aplicación o que se impongan medidas de prevención o de evitación de nuevos daños conforme a lo dispuesto en la misma. Por tanto, aun cuando no pueda exigirse la responsabilidad medioambiental de la Ley 26/2007, ello no obsta para que sea exigible la restitución del daño causado en el ámbito medioambiental, conforme a la normativa general y a la normativa sectorial aplicable que hemos citado, siempre y cuando la acción para reclamar no haya prescrito.
- 5) Finalmente, cabe plantearse si técnicamente podemos considerar que estemos ante un supuesto de suelo contaminado, en cuyo caso cabría acudir

**ABOGACÍA GENERAL
DE LA GENERALITAT**

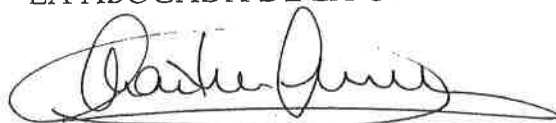
a las soluciones que respectos de tales suelos se establecen en la vigente Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados (arts. 33-38).

- 6) Del mismo modo, y aun cuando no exista una obligación legal, siguiendo criterios de oportunidad, cabría plantearse la participación de la propia Conselleria en la limpieza del suelo y sellado del vertedero, en el marco de sus competencias de protección del medio ambiente.

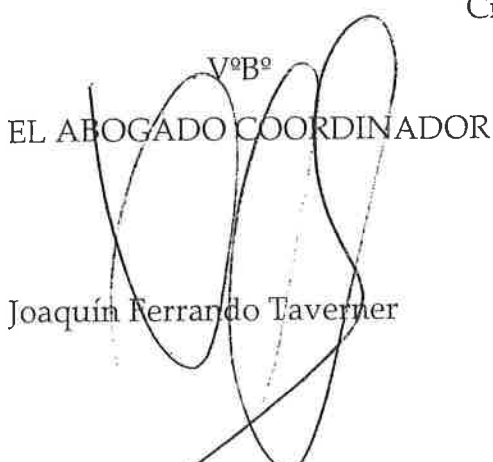
Es todo cuanto tiene que informarse por esta Abogacía, teniendo en cuenta, que el presente informe no tiene carácter preceptivo de conformidad con el artículo 5.2.a) de la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica a la Generalitat. Por otro lado, el presente informe, de acuerdo con las previsiones del artículo 6 de la Ley 10/2005, citada, tampoco tiene el carácter de vinculante pero los actos y resoluciones administrativas que se aparten de ellos habrán de ser motivados y su hipotética falta en la tramitación no implicaría por sí sola la invalidez o ineficacia del acto de que se trate

Valencia, 21 de marzo de 2013

LA ABOGADA DE LA GENERALITAT



Cristina Martínez Aparisi

VºBº
EL ABOGADO COORDINADOR

Joaquín Ferrando Taverner

